

Causa RIT N° : O-47-2021
Causa RUC N° : 21-4-0320573-4
Demandante : Karina Sepúlveda Gazzo
Demandado : Administradora de Fondos de Pensiones Capital SA
Materia : Despido indebido y cobro de indemnizaciones y prestaciones.



Curicó, a diez de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS Y OÍDOS:

PRIMERO: Individualización completa de las partes litigantes.- Que en esta causa **RIT O-47-2021, RUC 21-4-0320573-4**, seguida ante éste tribunal interviene como parte demandante **Karina Andrea Sepúlveda Gazzo**, RUN 13.574.641-K, agente de ventas, domiciliada según consta de mandato en El Rodeo N° 836, casa N° 7, Villa Santa Laura del Bordo, Curicó, demandante y demandada reconvencional asistida y patrocinada por los abogados José Luis Cisternas Fauré y Teresa Andrea Cavalla Penroz, ambos con domicilio y forma de notificación que consta en el proceso; y como parte demandada y demandante reconvencional **Administradora de Fondos de Pensiones Capital SA**, RUT 98.000.000-1, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por Jaime Munita Valdivieso, RUN 11.477.182-1, ingeniero comercial, ambos con domicilio según mandato en Avda. Apoquindo N° 4820, Las Condes, empresa demandada asistida y patrocinada por los abogados José Luis Maldonado Vásquez, Hernán Marcelo Albornoz Serrano, Paola Alejandra Zúñiga Serrano, Alex Humberto Muñoz Miño, todos con domicilio y forma de notificación que consta en el proceso.

SEGUNDO: Síntesis de la demanda, sus fundamentos de hecho y de derecho, y alegaciones.- Que la parte demandante deduce demanda de despido indebido y cobro de prestaciones e indemnizaciones en contra de la parte demandada, indicando – de modo sucinto a lo descrito en su demanda de 17 hojas- que la demandante ingresó a trabajar para la demandada con fecha 10 de abril de 2017, desempeñándose en como agente de ventas hasta su despido el 21 de enero de 2021. Explica que conforme al contrato su función comprendía la de obtener que personas sujeta a la obligación de efectuar cotizaciones previsionales mensuales en una sociedad administradora de fondos de pensiones, adopten en definitiva y como consecuencia de los servicios del trabajador, la decisión de afiliarse o traspasarse efectivamente a AFP CAPITAL S.A. Su jornada laboral, se regía por lo establecido en el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo. En relación a su remuneración, ésta comprendía elementos fijos y variables, de tal forma que el promedio de sus últimas tres remuneraciones (octubre, noviembre y diciembre 2020) ascendió a un promedio de \$2.494.907.

Agrega la demandante que con fecha 21 de enero de 2021, la demandada la despidió aduciendo la causal del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, separándola inmediatamente de sus labores en esa misma fecha. Tras describir la carta de despido que recepcionó, advierte que ésta aduce motivos que por un lado son ajenos a la relación laboral; otros son derechamente falsos o al menos inexactos y jurídicamente no pueden ser comprendidos en la causal de despido aducida por el empleador.



En efecto, manifiesta que resulta fundamental para el correcto análisis exponer que la actora – al igual que la mayoría, sino la totalidad, de los trabajadores de la demandada- se encuentra afiliada a la AFP demandada. Es decir, es afiliada y cliente de su empleadora. En cuanto afiliado y cliente tiene todos los derechos propios que emanan de dicha condición que van desde contratar productos adicionales, como tener una cuenta 2; ahorro previsional voluntario; operar cambios de fondos de sus ahorros previsionales con la finalidad de obtener mejor rentabilidad de sus fondos, lo que a simple observación forma parte del sistema de AFP y sus promocionadas bondades. Sostiene que en tal contexto, la AFP demandada creó en el año 2017 un producto, denominado “Giro Fácil”, que permite que el afiliado pueda girar dinero tanto desde su cuenta de ahorro 2, como desde su ahorro previsional voluntario. La gran ventaja con la cual la AFP demandada promociona este producto es que, a diferencia de otras AFP, permite girar dinero –transfiriéndolo a una cuenta corriente, por ejemplo de forma casi inmediata. En cambio, en otras AFP de la competencia esa operación demora un par de días.

Precisa la demandante que desde la implementación del producto giro fácil, éste resultó muy útil para manejar excedentes que se ahorraban en la cuenta de ahorro voluntaria de manera que al permitir un giro rápido permitía tener ahorro con una buena rentabilidad y en caso de necesidad disposición inmediata de dinero por hasta un monto de \$300.000. Así se promocionaba y vendía esta herramienta a los afiliados para incentivar la contratación de cuentas “dos” y de ahorro previsional voluntario. En ese escenario, resulta que después de tres años usando esta herramienta a fines de 2020, la demandada se percató que había un error con la plataforma “giro fácil” que consistía en que cuando se efectuaban giros y se operaban cambios de fondos la plataforma de la AFP no descontaba correctamente el monto girado. Así, mientras se realiza la investigación interna pocos días antes del despido, y en circunstancias que el problema de la plataforma se hizo de conocimiento público, la demandante revisó sus movimientos y se percató que efectivamente y por un error de la plataforma de la AFP se encontraba en la misma situación que miles de clientes de la misma AFP, en relación a giros efectuados en abril y mayo de 2020, que dicho sea de paso – advierte la demandante- no se corresponden en su totalidad con los señalados en la carta de despido, ya que su perfil de cliente de los movimientos desde la cuenta 2 solo 1 coincide de las 4 señaladas en la carta de despido y que corresponde a la solicitud 1521174, en tanto que de los giros de APV, de los 14 giros que se mencionan en la en la carta, sólo 6 son coincidentes con los informados en el perfil cliente y corresponden a las solicitudes 705498; 683691; 683725; 615716; 569146 y 562158. Agrega que los demás movimientos señalados en la carta de despido no aparecen en el perfil de usuario de la demandante.

En este punto, la parte demandante aclara que su parte no hizo ninguna operación indebida, como señala su ex empleador en la carta de despido, ya que en su calidad de cliente de la AFP, como más de un millón y medio de chilenos, se limitó a utilizar como cliente un servicio ofrecido por la referida administradora haciendo uso de los fondos que poseía en las cuentas respectivas y por un error de la plataforma de la administradora de fondos de pensiones algunas de esas operaciones no fueron reflejadas.

Con ello, precisa que la situación descrita por el ex empleador constituye por una lado una evidente falsedad de la carta de despido y por otro constituye una prueba



irrefutable que el producto y plataforma de la AFP demandada es poco transparente y además constituye un riesgo no sólo para la compañía como pretende aparentar la demandada en su comunicación de despido, sino para los ahorrantes, lo que, dicho sea de paso, pondremos en conocimiento de las superintendencias competentes.

La situación antes descrita, indica la demandante, tiene relación con una actividad desarrollada por ella como cliente y con un error producido de una forma inexplicable por la propia plataforma de la demandada. La actora advierte que ella no manipuló el sistema. No usó información interna o privilegiada de ninguna especie. No hizo trampa de forma alguna. Simplemente usó su perfil de cliente para usar un producto contratado como hizo muchas veces. Prueba de ello es que según información que maneja ella esta situación afecta a miles de clientes de AFP Capital, incluida decenas de trabajadores, los que se enteraron de esta situación cuando cundió el rumor de que la compañía había emprendido una investigación interna, al punto que la actora cuando se dio cuenta de que la situación se había producido en su caso se lo comunicó a su empleador.

Manifiesta la demandante que como se puede observar de la carta de despido, le reprocha una cuestión que excede largamente el contenido obligatorio de la relación laboral y presume una actitud dolosa de su parte, sin siquiera exponer con un mínimo de honestidad que los errores provienen de un producto financiero y plataforma que es insegura y genera errores que lejos de ser asumidos se pretenden mostrar como un acto de incumplimiento contractual o falta ética, lo que jurídicamente es inaceptable. Destaca además que es de público conocimiento que AFP Capital ha tenido serios problemas con las cuentas de ahorro previsionales de sus clientes, tal y como lo menciono en este libelo, la noticia que adjunta a la demandante que fue publicada el 13 de enero de 2021 en “meganoticias.cl” y da cuenta de la seriedad de los problemas que afectan a la demandada con el manejo de las plataformas e información de sus clientes. La misma noticia fue publicada en el sitio web informativo 24 horas de TVN con la misma fecha.

Al analizar las consideraciones de Derecho, describe la causal del art. 160 N° 7 del C. del Trabajo y todos los supuestos que la configuran, para sostener que en su caso, esto no se verifica en su caso, para pretender como plantea la demandada el configurar una causa justa de despido. Por lo anterior, el no poder subsumir en ella hipótesis fácticas -que si bien podrían ser reprochables- éstas no deberían tener una ponderación justificante del término de la relación laboral, por cuanto no tendrían entidad sustancial que se fija normativamente. En especial la causal de despido por incumplimiento grave constituye una causal de contenido abierto e indeterminado de hipótesis de infracción contractual graves que debe ser delimitada bajo ciertos estándares y requisitos que la doctrina y jurisprudencia han descrito para que opere dicha causal y que entendemos no se encuentran presentes en este caso.

Con ello, tras evaluar en extenso que la causal implica que la conducta que se le imputa debe tratarse del incumplimiento de una obligación contractual, además de indicar que el reglamento interno no es fuente de obligaciones *per se*; además que no se verifica la infracción al contenido ético, los deberes de conducta y la buena fe; así como que el incumplimiento que se le imputa debe ser grave y además culpable, refiere que no se verifica



ninguno de tales elementos, máxime si su conducta fue en su rol de cliente y no de trabajadora dependiente, por lo que sostiene que su despido resultó ser indebido.

Tras describir en extenso las peticiones precisas y concretas que somete a conocimiento del tribunal, a saber, que se declare que entre las partes existió una relación laboral regida por el Código del Trabajo, continua e ininterrumpida desde el 10 de abril de 2017 y hasta el 21 de enero de 2021, en virtud de la cual ella prestó labores para la demandada AFP CAPITAL S.A. como Agente de Ventas; así como que se declare que al momento de su despido el promedio de sus últimas tres remuneraciones (octubre, noviembre y diciembre de 2021) ascendió a un promedio de \$2.494.907, lo que constituye su última remuneración para todos los efectos legales; que se declare que el término de la relación laboral y separación de las labores se produjo con fecha 21 de enero de 2021, y que el empleador imputó a su persona la causal del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo; que atendida la falta de efectividad de la causal invocada el despido del que fue objeto su parte es indebido; que como consecuencia de las declaraciones anteriores la demandada debe ser condenada a pagar las siguientes indemnizaciones y prestaciones: i.- La indemnización sustitutiva del aviso previo en la suma de \$2.494.907; ii.- La indemnización por años de servicios en la suma de \$9.979.628; iii.- El aumento del art. 168 letra “a” del C. del Trabajo por haberse invocado indebidamente la causal del N° 7 del artículo 160, el aumento en la indemnización precedente en un 80%, esto es la suma de \$7.983.702; iv.- La suma de \$1.474.688 por feriado proporcional; v.- además solicita que se sirva condenar a la demandada, al pago de los reajustes; y hecho lo anterior, aplicar el interés legal, según lo disponen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo o la suma que el tribunal estime pertinente según el mérito de autos, a todas y cada una de las prestaciones demandadas anteriormente; vi.- Todo lo anterior con expresa condenación en costas de su ex empleadora y demandada de autos.

Por todo ello, y en mérito de lo expuesto y de lo dispuesto por los artículos 162 y 168 del Código del Trabajo, y demás normas legales y reglamentarias pertinentes, la parte demandante pide tener por interpuesta en tiempo y forma demanda de despido indebido, cobro de prestaciones e indemnizaciones en contra de AFP CAPITAL S.A., ya individualizada, admitirla a tramitación, y en definitiva dar lugar a las declaraciones y peticiones de indemnizaciones y recargos que detalladamente se ha formulado en esta presentación las que da por expresamente reproducidas, con costas.

TERCERO: Síntesis de la contestación de la demanda, sus fundamentos de hecho y de derecho, y alegaciones, haciendo presente que en audiencia preparatoria se desestimó una excepción de compensación. Que la parte demandada procede a contestar la demanda, solicitando su rechazo con costas. En ese sentido, la empresa demandada refiere – de modo sucinto a lo descrito en lo pertinente en su contestación de demanda en 19 hojas- como hechos no controvertidos que efectivamente la actora prestó servicios para la demandada desde el 10 de abril de 2017 hasta el 21 de enero de 2021, en el cargo de agente profesional de ventas; además de ser cierto que con fecha 21 de enero de N° 7° del artículo 160 del Código del Trabajo, es decir, *“Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”*; advierte que es efectivo que la demandante de autos



estaba exenta del cumplimiento de jornada de trabajo, de acuerdo a lo prescrito en el inciso 2° del artículo 22 del Código del Trabajo; y es veraz que la demandante de autos tenía contratada con su parte los productos Cuenta de Cotización Previsional Voluntaria -CCV- (la comúnmente denominada “Cuenta 2”), y la Cuenta de Ahorro Previsional Voluntario -CAV- (conocida como APV), situación que se habría prolongado al menos hasta la fecha de su despido.

Sin perjuicio de ello, refiere que casi todas las circunstancias fácticas contenidas en el libelo pretensor, se niegan, a saber, no es efectivo que la remuneración de la demandante de autos, para efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, sea la suma de \$2.494.907; ello, pues de acuerdo al promedio de las últimas 3 remuneraciones correspondientes a meses íntegramente trabajados por la demandante (octubre a diciembre de 2020), y descontados los haberes respectivos de acuerdo a los parámetros del artículo 172 del Código del Trabajo, la suma que debe servir de base para eventuales indemnizaciones legales es de \$2.117.510.- Añade que la cifra anterior resulta de descontar haberes de carácter transitorio u ocasional percibidos por la denunciante dichos meses: Octubre 2020 (se descuenta el haber “Compensación Feriado” por \$389.602); Noviembre 2020 (se descuenta el haber “Compensación Feriado” por \$311.682 y Bono Trimestral por \$300.000); y Diciembre de 2020 (se descuenta el haber “Aguinaldo Navidad” por \$130.908); sostiene que no es efectivo que a la demandante de autos corresponda la suma de \$1.474.678.- por concepto de feriado proporcional devengado al término de su relación laboral, ello, pues por el contrario, por dicho concepto a la demandante de autos le corresponde la suma de \$1.197.550, según se acreditará debidamente en autos; no es efectivo que las razones del despido de la demandante sean ajenas a la relación laboral, no tengan conexión con sus obligaciones como trabajadora, o sean falsas o inexactas; no es efectivo que hubiese sido la demandante de autos la que se percató y dio cuenta a su parte del hecho de estar incluida entre las cuentas que presentaron operaciones irregulares del producto “Giro Fácil”; tampoco es efectivo que la demandante de autos hubiese utilizado el producto “Giro Fácil” *“haciendo uso de los fondos que poseía en las cuentas respectivas”*; no es cierto que el producto “Giro Fácil” y la plataforma creada para el procesamiento de dicho producto, hubiese constituido un riesgo para los ahorrantes; no es efectivo que la demandante de autos no hubiese incumplido las obligaciones adscritas a su contrato de trabajo mediante el accionar imputado en su carta de despido; no es efectivo que la demandada esté, mediante el despido, reprochándole a la actora un fallo de la plataforma digital del producto “Giro Fácil”; no es cierto que respecto de la demandante *“...la relación laboral se extendía por más de 8 años, con una carrera siempre ascendente...”*; no es cierto que el incumplimiento incurrido por la actora no sea grave o culpable.

La empresa sostiene que tal como puede desprenderse de la lectura de la carta de despido que la empresa le remitió a la demandante de autos, en ella se imputó la realización de 17 solicitudes de giros de su parte, utilizando para dichos efectos el producto denominado “Giro Fácil”, que es un servicio anexo a los instrumentos de ahorro previsional voluntario que la señora Sepúlveda tenía contratada con mi representada (Cuenta de Cotizaciones Voluntarias o “Cuenta 2” y la Cuenta de Ahorro Voluntario o APV). Fruto de tales solicitudes la demandante de autos recibió la suma de \$4.744.753. No obstante, de esa cifra solo



\$129.926.- correspondieron a cargos realizados sobre los fondos contenidos en su cuenta de cotizaciones voluntarias, correspondiendo \$4.614.827.- a disposiciones patrimoniales asumidas indebidamente por la demandada. Lo anterior era posible, tal como la carta de despido se encarga claramente de evidenciar, porque el sistema implementado por la empresa respecto del producto “Giro Fácil” evaluaba la primera de las solicitudes de giro (cada una de ella hasta por \$300.000) de acuerdo a la efectiva existencia de fondos en las cuentas de ahorro voluntario de sus afiliados. No obstante, una vez cursadas dichas solicitudes, no existía impedimento para que se volvieran a realizar otras. El problema era que respecto de estas últimas, el sistema no actualizaba de inmediato los saldos de cuentas de ahorro voluntario en sincronía con el desembolso monetario de los primeros giros, sino que consideraba los saldos de cuenta existentes antes de verificarse estos, evaluando y cursando las nuevas solicitudes como si en verdad existieran fondos para ello, en circunstancias que, tal como fue el caso en la casi totalidad de los montos correspondientes a las 17 solicitudes de giro descritas en la carta de despido de la demandante de autos, no existía respaldo monetario para ello.

Por ello, pese a lo anterior, los pagos se realizaban igualmente, y respecto de todos los giros a cuenta del producto “Giro Fácil” (incluidos aquellos que sí tenían sustento contable para ser cursados) el dinero provenía directamente del patrimonio de la demandada, mecanismo que se había implementado para asegurar que los pagos se efectuaran dentro de las 24 horas siguientes al momento de realizar las solicitudes; esto habría sido imposible de mediar una transferencia interna proveniente de los fondos de las cuentas de cotizaciones voluntarias de nuestros afiliados como condición previa para realizar el pago de las solicitudes a cargo del producto.

Precisa que todo lo anterior era instrumental al objetivo de fidelización y mejora de la calidad de servicio al que estaba consagrado el producto “Giro Fácil”, ya que el procedimiento normal habría supuesto una espera de al menos 4 días desde la realización de la solicitud para realizar los pagos, lapso de tiempo en el que incluso podría haber fluctuado negativamente la cifra líquida a entregar, dadas las variaciones de rentabilidad. Las solicitudes de giros a través del producto “Giro fácil” se materializaban a través de formularios que esta parte se encargará de suministrar en las instancias probatorias pertinentes, específicamente aquellos correspondientes a las 17 solicitudes que irrogaron perjuicio a mi representada. Una vez cursadas las solicitudes, los pagos se hacían, tal como lo indica la carta de despido remitida a la actora, a través de las siguientes modalidades: depósitos de dinero en las cuentas bancarias de los solicitantes o vales vista en línea a través de las mismas cuentas. Por ello, el sistema se demoraba un tiempo en actualizar sus saldos. Pero la actualización en casi la totalidad de los casos solo comprendía los montos provenientes de las primeras solicitudes de giros del producto “Giro Fácil”, sin reflejar las subsiguientes realizadas en el tiempo intermedio, o reflejándolas corregidas en beneficio de los solicitantes mediante abonos (glosados como “*abono financiamiento*”), pese a que la disposición patrimonial por parte de la empresa era total.

Debido a lo anterior es que, con posterioridad a la actualización de las cuentas, tal como fue el caso de la demandante de autos, le fue posible a ella realizar nuevas solicitudes y replicar la operativa, explotando una debilidad objetiva del sistema en su beneficio, pero en



detrimento del patrimonio de la compañía, ya que, como se dijo, todos los montos que se pagaban a cuenta de solicitudes del producto “Giro Fácil” provenían, con o sin soporte financiero que los avalase, del patrimonio de la empresa, siendo ella la que finalmente asumió todos aquellos desembolsos sin respaldo contable de los solicitantes. Esto último no deja de ser relevante, ya que la debilidad de la operativa mencionada jamás irrogó perjuicio a afiliado alguno de la empresa. La demandante pone de relieve aquella circunstancia, tratando de desviar la atención valiéndose para dicho efecto incluso de inserciones en medios de comunicación que mostrarían irregularidades que afectaron a los sistemas de la empresa (soslayando, dicho sea de paso, que en este último periodo de tiempo los problemas han sido comunes a todos los actores de la industria, dadas las alteraciones en la operativa de los fondos de cotización previsional derivadas de las medidas legislativas de retiro para hacer frente a la pandemia). Lo señalado elude que la empresa, incluso en la carta de despido, y durante todo el procedimiento investigativo realizado a consecuencia del descubrimiento de este suceso, siempre ha reconocido que existió una falla o desprolijidad del sistema. No obstante, la imputación contenida en la carta de despido de la demandante de autos no pretende hacerla responsable de ello o utilizarla como “chivo expiatorio” (sic) por el defecto generado; se reprocha el haberse valido de ese defecto para obtener un provecho indebido, el que, debido a su cargo en la compañía -Agente de Ventas- y el conocimiento que el ejercicio de mismo le proveía, resulta intolerable y perfectamente calificable como falta de naturaleza laboral.

Agrega que de la lectura de la carta de despido puede desprenderse que se trata de una operativa técnica de compleja explicación. Como se dijo, las 17 operaciones descritas en la carta de despido realizadas a cuenta del producto “Giro Fácil” fueron aquellas en las que se irrogó efectivo perjuicio económico a la empresa, valiéndose para dicho efecto del defecto del sistema relatado. No obstante, en la superficie de esas operaciones irregulares sí existían algunas operaciones realizadas por la demandante que tenían soporte contable y que sirvieron de fachada, al ella como a otros afiliados, para obtener sumas de dinero indebidas en perjuicio de la empresa. Específicamente, las operaciones de los números 1 a 10 descritas en la carta de despido de la actora correspondieron a giros de dinero dirigidos a su cuenta bancaria (registrada en los formularios de solicitud de retiros como cuenta corriente del BCI número 70633908). La particularidad estriba en que en esas operaciones la totalidad de las sumas solicitadas fueron financiadas por la empresa, al no existir sustento monetario en las cuentas respectivas, sin perjuicio que esta parte tiene a disposición los comprobantes bancarios donde constan los depósitos de dichas sumas. Por el contrario, las restantes operaciones descritas (de los números 11 al 17), en las que igualmente se generaron transferencias de la empresa a la cuenta mencionada, se trataron de modalidades de “financiamiento”, es decir, donde un porcentaje muy menor del giro solicitado tenía respaldo monetario en las cuentas de cotizaciones respectivas, siendo el remanente suministrado -financiado- por la demandada, lo que se reflejaba en el historial de movimientos de las cuentas de la actora a través de un abono (registrados con una glosa de nombre “*abono financiamiento*”). Lo anterior contextualiza lo señalado en la carta de despido remitida a la actora, donde de las 17 transacciones descritas, y que implicaron desembolsos



monetarios para la demandada por sobre los cuatro millones y medio de pesos, solo existiera respaldo monetario por \$129.926.-

Agrega el demandante que en el libelo pretensor existe un reconocimiento parcial de la operativa descrita en la carta de despido. En efecto, la actora reconoce la efectividad de 7 de las 17 operaciones descritas (específicamente, se reconocen los giros singularizados en la carta de despido con los números 2,3,5,7,8,9 y 10), indicando que las restantes no aparecen en su historial de transacciones, de lo que ella daría cuenta en las instancias probatorias del presente juicio. Por ello, de las 7 transacciones reconocidas por la demandante supusieron un perjuicio económico para su parte de \$1.903.000, que por sí solo permite afirmar la gravedad de la irregularidad imputada en la carta de despido.

Añade la demandada que con el solo mérito del reconocimiento descrito se podrá declarar que el despido de la actora resultó justificado, encontrándose esta parte exonerada de la carga de la prueba respecto de las 7 transacciones descritas. El único análisis pertinentes respecto de estas transacciones irregulares reconocidas es si resultan ser imputables como incumplimiento laboral, cuestión que tanto en la carta de despido como en la presente contestación esta parte argumenta en sentido afirmativo, no resultando sostenible que una persona que desempeñaba el cargo de “Agente Profesional de Ventas”; que recibía las remuneraciones variables de la entidad de la demandante de autos; y que, por ende, conocía de sobra el producto “Giro Fácil”, pueda excusarse bajo el expediente de ignorancia o inadvertencia al recibir incrementos patrimoniales sin causa por la cuantía ya referida, y que además se gatillaron por solicitudes propias, como se acreditará cumplidamente en autos.

Precisa que respecto de las demás transacciones no reconocidas por la demandante, su parte suministrará evidencia que las mismas sí se generaron y que además lo fueron a raíz de solicitudes realizadas por la demandante, de lo que se dará cuenta a través de los respectivos formularios. También se acreditará que respecto de dichas transacciones existió una disposición patrimonial de la empresa a favor de una cuenta bancaria registrada por la demandante en las solicitudes respectivas. El hecho presunto que las mismas no aparezcan en los respectivos historiales de las cuentas voluntarias de la actora sería una señal de las lagunas del sistema “Giro Fácil”, reconocidas por esta parte en todo momento, sin que ello obste a la configuración de la falta imputada a la demandante de autos o sirva de exoneración, dadas las circunstancias ya referidas.

Tras analizar los dichos de la actora sobre que *“Mientras se realiza la investigación interna pocos días antes del despido, mi representado observó sus movimientos y se percató que efectivamente y por un error de la AFP se encontraba en la misma situación que miles de clientes de la misma AFP...”*. Su parte sostiene que producto de una alarma de su área de Operaciones y Cumplimiento, inició un complejo proceso de auditoría que constató la existencia de un problema sistémico en el servicio “Giro Fácil”, asociado a las cuentas de cotización voluntarias. Fruto de aquel proceso, la empresa pudo hacer un levantamiento de los perjuicios irrogados a la compañía, además de determinar los afiliados en cuyas cuentas se realizaron las solicitudes de giro sin respaldo monetario. Es decir, es efectivo que el caso de la demandante de autos no es aislado. Específicamente, el informe conclusivo de la auditoría realizada, de noviembre de 2020, estableció que fueron 1.058 clientes los que se



vieron beneficiados indebidamente a raíz del defecto técnico del sistema “Giro Fácil”, ascendiendo el perjuicio económico a la compañía a más de 850 millones de pesos. Una vez determinados los afiliados involucrados, y dada la importante cantidad de trabajadores de la empresa que son además clientes, se hizo el cruce de información para determinar cuántos de ellos fueron parte de la irregularidad. Esto no puede ser más que razonable, ya que no es particularmente inusual que en este tipo de sucesos trabajadores de las empresas, que además son clientes de las mismas, puedan estar involucrados, dado el conocimiento de los sistemas (y sus debilidades) que poseen, sin perjuicio que en estos casos el desvalor es evidentemente superior al de un simple cliente que obtiene un beneficio económico indebido, dada la especial posición de conocimiento y mayor posibilidad de asegurar la impunidad en la que se encuentran para realizar operaciones irregulares. Todo lo anterior, sin olvidar el deber de fidelidad y buena fe que los vincula a la empresa en su calidad de trabajadores.

Precisa que la empresa evaluó el número de transacciones irregulares realizadas y el perjuicio económico causado a la compañía a consecuencia de ellas para tomar decisiones disciplinarias. Evidentemente, en casos de trabajadores con operaciones puntuales o de menor entidad, no resultaba proporcional cursar la sanción más drástica de nuestro ordenamiento laboral, cuestión que no es señal de discriminación, sino que un imperativo de justicia y prudencia.

Tras efectuar un extenso análisis sobre el procedimiento aplicado en la investigación de rigor, en donde el área de Fiscalía y Compliance decidió comunicarse personalmente con los trabajadores involucrados, a fin de indagar sus descargos al respecto, sin la impersonalidad propia de una mera carta o un correo electrónico. En el caso de la actora tal llamada fue efectuada por el Fiscal de la compañía, César Soto Cavieres, quien le comunicó al inicio de la conversación, sin ambigüedades o imprecisiones, que la misma sería grabada y que además era de naturaleza confidencial, por lo que no existieron impedimentos para que la actora se negase a continuar en tales condiciones. También se le informó a la señora Sepúlveda que la conversación se enmarcaba en un procedimiento de investigación iniciado para el esclarecimiento de irregularidades en las que estaba involucrada respecto del producto “Giro Fácil”.

Así, su parte tiene a su disposición el audio con la conversación que fue grabada en esa oportunidad, tal como se le indicó a la demandante de autos, y pretende hacer uso de él como medio probatorio en la presente causa, así como del historial de transacciones y los detalles de las cuentas de cotización que la demandante de autos tenía contratada con la demandada, sin que ello importe, al tenor de extensos argumentos que esto importa violación de privacidad de información.

Agrega que existiendo el error del sistema mencionado, puede ser entendible que incluso un trabajador de la compañía, con la posición que tenía la señora Sepúlveda, pudiese verse beneficiada involuntariamente por una transacción puntual. Pero aquello no es racionalmente sostenible tratándose de las 7 transacciones que la misma demandante reconoce, y que alcanzaron según sus propias palabras el total de \$1.903.000.-, ni menos aún en relación a las 17 operaciones imputadas por la empresa en la carta de despido de la actora, donde el perjuicio para la empresa alcanzó la suma de \$4.614.827. Indica que argüir como defensa, asilándose en el error del sistema, ciertamente no se condice con las



máximas de la experiencia que se deberá tener presente al resolver el presente litigio. Por ende, en este caso hubo un incumplimiento de la demandante de autos de carácter palmario, y, además, evidentemente grave.

Tras analizar las conductas imputadas en la carta de despido, refiere que éstas son sancionables laboralmente dando cuenta que la función que desempeñaba la demandante de autos suponía el acceso a información importante, tanto respecto de los clientes como de los productos y sistemas que la empresa ha implementado para la tarea de administración de fondos de sus afiliados (entre los cuales se encuentra el servicio “Giro Fácil”, propio de los productos de cotización voluntaria que la actora de autos conocía perfectamente). Aquello implica que es elemento de la esencia del cargo que la demandante ejecutaba el cumplimiento de un alto estándar de confianza y fidelidad hacia la compañía, cuestión consustancial a una actividad en la que está involucrada la fe pública y que es regulada con especial acuciosidad por organismos sectoriales especializados.

Por ende, el argumento de la señora Sepúlveda consistente en que las conductas imputadas que derivaron en su despido no eran de índole laboral, ya que en ellas se estaba relacionando con la demandada en calidad de cliente, soslaya la naturaleza y especiales deberes del cargo que ejercía en AFP Capital S.A., además de pasar por alto que el conocimiento que el ejercicio de su cargo le proveía tornaba laboralmente reprochable la obtención de un beneficio económico en perjuicio de su propio empleador, valiéndose para dicho efecto de un resquicio del sistema operativo del producto “Giro Fácil”. Respecto de aspectos que intuitivamente no calzan con las obligaciones estrictamente laborales, pero que por especiales circunstancias adquieren naturaleza laboral refiere que todas aquellas características que hacen sancionables conductas que, como las de la demandante de autos, podrían ser calificadas, en cierto grado, como no estrictamente enmarcadas en el ejercicio de las funciones del cargo, se cumplen en el presente caso, adquiriendo relevancia sancionatoria laboral. Cita doctrina y jurisprudencia de respaldo.

En igual sentido, describe las normas infringidas, a saber, art 160 N° 7 del C. del Trabajo, que analiza en extenso, el contrato de trabajo en su cláusula quinta; el reglamento interno de orden, higiene y seguridad en su art. 8, el código de ética de la empresa en su numeral 8.3, y el Código Civil en lo referente al art. 1546.

Por todo lo anterior, la parte demandante pide tener por contestada la demanda de despido indebido y cobro de prestaciones laborales, interpuesta en su contra, rechazándolas en todas sus partes, todo con expresa condenación en costas.

CUARTO: Síntesis de la demanda reconvenzional, sus fundamentos de hecho y de derecho, y alegaciones. Que la parte demandada, en lo pertinente y sucintamente – al tenor de su contenido original de 3 hojas - sostiene que en virtud de los artículos 452, 420 letra “a” y el artículo 58 del Código del Trabajo, deduce, en caso de ser rechazada la excepción de compensación deducida – y que fue rechazada en la audiencia preparatoria de 29 de marzo de 2021- demanda reconvenzional por cobro de prestaciones laborales, en contra de la demandante y ahora demandada reconvenzional solicitando desde ya que se condene a la demandada reconvenzional al pago de la suma de \$1.704.534, con expresa condena en costas.



Precisa que respecto de la competencia para que se conozca de esta acción dentro del presente procedimiento ordinario laboral, cabe señalar que el artículo 452 del Código del Trabajo faculta la interposición de demandas reconventionales siempre que esta jurisdicción sea competente para conocer de la acción en cuestión como demanda, y que ésta esté además íntimamente vinculada a la acción principal. Por su parte, el artículo 420 letra “a” del Código del Trabajo señala la competencia del tribunal; y el artículo 58 inciso 3° faculta el descuento de las remuneraciones de sumas, que pueden alcanzar hasta el 15%, por concepto de pagos de cualquier naturaleza.

Por ello, sostiene que la acción reconventional que ejerce, se desprende que la demandada reconventional le adeuda \$1.500.000.- correspondiente a un préstamo blando único otorgado a la actora en su calidad de afiliada al Sindicato Nacional existente en la compañía, y cuyo derecho a percibirlo provino del instrumento colectivo pactado con dicha organización intermedia. Específicamente, el día 15 de enero de 2021, pocos días antes de su despido, y previa solicitud de su parte el mes de diciembre de 2020, a la actora de autos se le depositó la suma referida, respecto de la cual la empresa no ha recibido devolución alguna. Además, existe una deuda de \$204.534, correspondiente al remanente insoluto de un préstamo personal libre de intereses otorgado por la empresa a la señora Sepúlveda el mes de marzo de 2020.

Destaca que hay que tener presente que el concepto de “prestaciones laborales” para efectos del procedimiento legal tendiente a obtener su pago, no solamente debe limitarse al eventual cobro que un trabajador haga de aquellas adeudadas por su empleador durante la vigencia de la relación laboral o una vez terminada ésta, sino que es propio que cubra aquellas prestaciones que el trabajador adeude a su empleador por convenciones y los beneficios y prestaciones generadas a raíz de las mismas en el seno de la relación laboral, y que fueron suscritas por el empleador precisamente bajo el entendido que su contraparte era el trabajador y no una persona natural cualquiera o un consumidor. De manera tal que el procedimiento aplicable para obtener su reembolso debe ser el ordinario laboral y no el juicio civil común, al tratarse de cuestiones suscitadas entre trabajadores y empleadores por aplicación de las normas laborales. Todo lo anterior se refuerza si tenemos en consideración que los préstamos otorgados lo fueron en virtud del cumplimiento de un instrumento colectivo por parte de la empresa, por lo que la deuda reclamada se inserta de pleno dentro de la mecánica de la relación laboral, encontrando su causa eficiente en la misma.

Añade que existe además íntima relación con la acción principal deducida, la que también comprende prestaciones adeudadas, por lo que es de toda coherencia que todas las materias surgidas del ámbito de la relación laboral que vinculó a las partes de este juicio se conozcan en este procedimiento. Esta solución se condice, por lo demás, con los principios formativos del procedimiento laboral, como el de celeridad, concentración y con el genérico de economía procesal.

Por lo anterior, la demandada y ahora demandante reconventional pide al tribunal tener por deducida, en caso de rechazo de la excepción de Compensación la presente Demanda Reconventional por cobro de prestaciones laborales, en contra de Karina Andrea Sepúlveda Gazzo, ya individualizada, solicitando desde ya se le condene a la demandada



reconvencional al pago de la suma de \$1.704.534.- por los conceptos referidos en el cuerpo de la presente acción, con expresa condena en costas en caso de injustificada oposición.

QUINTO: De la contestación de la demanda reconvencional en audiencia preparatoria. Que durante la audiencia preparatoria de fecha 29 de marzo de 2021, tras agotar la exposición somera tanto de la demanda, como de la excepción de compensación, contestación de la demanda y de la demanda reconvencional subsidiaria, el tribunal confirió traslado a la parte demandante, y ahora, demandada reconvencional, a fin que conteste dicha acción.

Ésta, de forma verbal, y en lo que interesa, contesta la demanda reconvencional dando cuenta que solicita el rechazo, dando cuenta que su parte niega y controvierte la existencia de una obligación exigida en su contra por la empresa, máxime si la compensación opera como un modo de extinguir obligaciones, y que exige recíprocamente deudas exigibles al tenor de los arts. 1656 y 1657 del C. Civil, amén que debe ser probado por quien la alega al tenor del art. 1698 del C. Civil.

Al no ser una deuda exigible la que pretende la empresa en su contra, y por ende, no hay obligación que se le pueda imputar a su partes, máxime si de los fundamentos de planteados por la empresa, se destaca que ya reconoce que no es exigible en éstos momentos, sino sólo cuando se desprenda la sentencia definitiva de autos.

Con todo ello, la parte demandada reconvencional, pide el rechazo de la demanda reconvencional de compensación.

SEXTO: Del rechazo de la excepción de compensación, del llamado a conciliación y su resultado; de la inexistencia de hechos pacíficos en la causa; y de los hechos a probar. Que en la audiencia preparatoria de fecha 29 de marzo de 2021, el tribunal tras agotar la etapa de discusión, procedió a rechazar según los fundamentos de forma que constan en esa audiencia, la excepción de compensación por una cuestión de forma, de lo cual, la empresa deduce repone, siendo ello rechazado por el tribunal. Ello, sin perjuicio que la acción principal y la demanda reconvencional quedan para resolver en sentencia definitiva.

Luego, el tribunal llamó y propuso bases de conciliación a las partes en la audiencia preparatoria, la que no se produce.

A su vez, conforme al mérito de la etapa de discusión, se establecieron las siguientes convenciones probatorias:

1.- Existencia de relación laboral entre las partes iniciada el 10 de abril de 2017 al 21 de enero de 2021.

2.- La función de la demandante a la fecha de término de la relación laboral era Agente de Ventas.

3.- La trabajadora se encontraba, a propósito de jornada laboral, regulada según el artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo.

4.- El término de la relación laboral se produjo por despido, invocando la empresa incumplimiento grave de obligaciones, según artículo 160 del Código del Trabajo.

Luego, se procedió a recibir la causa a prueba, determinando como aquellos hechos que tiene el carácter de ser sustanciales, pertinentes y controvertidos, y que deben ser probados, a saber:



1.- Hechos y circunstancias que hacen debido el despido de la demandante al tenor de la comunicación de término.

2.- Base de cálculo de la remuneración mensual de la trabajadora. Hechos que lo constituyen.

3.- Procedencia y en su caso cuantía de las prestaciones reclamadas por la trabajadora. Hechos que lo constituyen.

4.- Procedencia y en su caso cuantía de los montos reclamados por la empresa. Hechos que lo constituyen.

SÉPTIMO: Del desarrollo del juicio, observaciones a la prueba y citación a las partes para notificación de sentencia. Que el juicio se desarrolló en audiencia de fecha 14 de mayo de 2021 y audiencia de continuación de juicio de fecha 24 de agosto de 2021, ocasión en la cual las partes incorporaron y rindieron sus medios de prueba, luego de lo cual efectuaron las observaciones a la prueba, y el tribunal procedió a dar aplicación al artículo 457 del C. del Trabajo, para efectos de las partes fueran citadas para notificación de sentencia definitiva para el día de hoy.

Y CONSIDERANDO:

OCTAVO: Exposición somera de la prueba rendida por la demandada y demandante reconvencional. Que la parte demandada y demandante reconvencional se hizo valer en juicio de las siguientes probanzas:

I.- Documental:

1.- Copia de contrato de trabajo de la demandante de 10/04/2017, con 6 anexos de contrato de trabajo (sobre anexo remuneraciones variables; uso de información confidencial; derecho a saber ley 16.744; prevención del delito ley 20.393; declaración de intereses en negocios y actividades externas; y de toma de conocimiento protocolo cliente AFP-WM) y recepciones de Reglamento Interno y Código de Ética, todos de la misma fecha.

2.- Copia de carta de despido de la demandante de autos de fecha 21 de enero de 2021.

3.- Copia de liquidaciones de remuneraciones de la demandante de autos, de octubre de 2020 a enero de 2021.

4.- Planilla de Movimientos Cuenta Cotización Voluntaria (CCV) correspondiente a la demandante de autos, con fecha de la primera operación el 18/05/2017 siendo la última el 26/02/2021.

5.- Planilla de Movimientos Cuenta Ahorro Voluntario (CAV) correspondiente a la demandante de autos, con fecha de la primera operación el 10/11/2017 siendo la última el 26/02/2021.

6.- Documento denominado "Informe de Movimientos Cuenta Cotización Voluntaria", correspondiente a la demandante de autos, periodo informado desde enero 2017 a marzo 2021.

7.- Documento denominado "Informe de Movimientos Cuenta Ahorro Voluntario", correspondiente a la demandante de autos, periodo informado desde enero 2003 a marzo 2021.

8.- Formularios denominados "Solicitud de Retiro Cuenta Ahorro Previsional Voluntario (remanente), de las siguientes fechas de suscripción: 28/09/2018; 16/10/2018;



22/10/2018; 20/11/2018; 21/11/2018; 03/12/2018; 17/12/2018; 30/01/2019; 13/02/2019; 15/03/2019; 18/04/2019; 02/05/2019; 06/05/2019; 15/05/2019; 04/06/2019; 12/06/2019; 13/06/2019; 17/06/2019; 17/07/2019; 18/07/2019; 12/08/2019; 05/09/2019; 12/09/2019; 16/09/2019; 02/10/2019 (solicitud y comprobante de pago de retiros); 02/10/2019; 11/10/2019; 18/11/2019; 23/12/2019; 27/12/2019; 13/01/2020; 27/01/2020; 10/02/2020; 11/02/2020; 13/02/2020; 13/03/2020; 16/03/2020; 25/03/2020; 08/04/2020; 09/04/2020; 21/04/2020; 22/04/2020; 11/05/2020; 12/05/2020; 22/05/2020.

9.- Formularios denominados "Solicitud de Retiro Cuenta Ahorro Voluntario (anticipo), de las siguientes fechas de suscripción: 17/01/2018; 13/02/2018; 13/03/2018; 18/04/2018; 07/06/2018; 14/06/2018; 20/07/2018; 02/10/2018; 11/10/2018; 16/10/2018; 22/10/2018; 21/11/2018; 22/11/2018; 30/11/2018; 17/12/2018; 16/01/2019; 21/01/2019; 04/03/2019; 15/03/2019; 04/06/2019; 13/04/2020; 16/04/2020; 28/04/2020; 13/05/2020; 22/05/2020; 02/06/2020.

10.- Pantallazos de pago exitoso, de la plataforma Office Banking del Banco Santander, correspondiente a la demandante de autos, de las siguientes fechas y montos: I- 13/12/2019 (\$200.000); II- 18/12/2019 (\$203.000); III- 02/01/2020 (\$299.000); IV- 16/01/2020 (\$300.000); V- 30/01/2020 (\$299.753); VI- 13/02/2020 (\$300.000); VII- 30/03/2020 (\$293.000); VIII-14/04/2020 (\$300.000); IX- 21/04/2020 (\$300.000); X- 24/04/2020 (\$300.000); XI- 24/04/2020 (\$300.000); XII- 04/05/2020 (\$300.000); XIII-14/05/2020 (\$300.000); XIV- 27/05/2020 (\$300.000); XV- 04/06/2020 (\$300.000); XVI- 05/06/2020 (\$300.000).

11.- Copia de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

12.- Código de Ética de AFP Capital S.A. actualizado a febrero de 2020.

13.- Cuadro que contiene los detalles de las operaciones contenidas en la carta de despido de la actora sin fecha.

14.- Copia de "Informe de Investigación "Incidente Giro Fácil".

15.- Documentos titulados "Comprobantes Vacaciones", de los siguientes periodos de descanso I- 26/10/2017 a 02/11/2017; II- 18/05/2018 a 22/05/2018; III- 14/09/2018 a 24/09/2018; IV- 31/10/2018 a 05/11/2018; V- 21/12/2018 a 07/01/2019; VI- 08/03/2019 a 11/03/2019; VII- 18/04/2019 a 21/04/2019; VIII- 13/09/2019 a 23/09/2019; IX- 30/10/2019 a 04/11/2019; X- 20/12/2019 a 02/01/2020; XI- 27/03/2020 a 30/03/2020; XII- 30/04/2020 a 05/05/2020; XIII- 20/05/2020 a 25/05/2020; XIV- 26/05/2020 a 27/05/2020; XV- 17/09/2020 a 21/09/2020; XVI- 09/10/2020 a 12/10/2020.

16.- Copia de los siguientes correos electrónicos: I.- Fecha: 29/12/2020. 18:03 horas. Remitente: Karina Sepúlveda Gazzo (ksepulvedag@hotmail.com). Destinatario: Cobro de Beneficios (Cobrodebeneficios@sura.cl). Asunto: Solicitud préstamo blando sindicato nacional; II.- Fecha: 29/12/2020. 18:46 horas. Remitente: Cobro de Beneficios (Cobrodebeneficios@sura.cl) Destinatario: Karina Sepúlveda Gazzo. Asunto: RE: Solicitud préstamo blando sindicato nacional; III.- Fecha: 06/01/2021. 12:08 horas. Remitente: Cobro de Beneficios (cobrodebeneficios@sura.cl) Destinatario: Sepúlveda Gazzo Karina. CC: ksepulvedag@hotmail.com. Asunto: Préstamo Sindicato Nacional.

II.- Confesional:



La parte demandada y demandante reconvenional solicitó que la demandante y demandada reconvenional, prestase confesional, logrando así que Karina Andrea Sepúlveda Gazzo, RUN 13.574.641-K, cesante, domiciliada en Pasaje El Rodeo N° 836, casa N° 7, Curicó, quien debidamente individualizada, legalmente juramentada y exhortada a decir verdad, declarase al tenor de sus dichos que constan íntegramente en el registro de audio del juicio realizado, que por economía procesal se dan por expresamente reproducidos.

III.- Testimonial:

La parte demandada y demandante reconvenional además logró la declaración en prueba testimonial de las siguientes personas:

1.- César Gyovanni Soto Cavieres, RUN 13.378.244-3, abogado, domiciliado en Avda. Charizero N° 15921, casa N° 112, Colina, quien debidamente individualizado, legalmente juramentado y exhortado a decir verdad, declara al tenor de sus dichos que constan íntegramente en el registro de audio del juicio realizado, que por economía procesal se dan por expresamente reproducidos.

2.- Valeria Andrea Cofré Sepúlveda, RUN 17.135.313-0, ingeniero comercial, domiciliado en Evaristo Lillo N° 29, Depto. 238, Las Condes, quien debidamente individualizado, legalmente juramentado y exhortado a decir verdad, declara al tenor de sus dichos que constan íntegramente en el registro de audio del juicio realizado, que por economía procesal se dan por expresamente reproducidos.

3.- Diego Ignacio Hernández Hausdorf, RUN 15.341.064-K, ingeniero comercial, domiciliado en Martín Bagnes N° 40, Maipú, quien debidamente individualizado, bajo promesa y legamente exhortado a decir verdad, declara al tenor de sus dichos que constan íntegramente en el registro de audio del juicio realizado, que por economía procesal se dan por expresamente reproducidos.

4.- Claudia Elvira Hernández Benítez, RUN 13.271.403-7, jefe de ahorro y gerente de operaciones, domiciliada en Altos de Arboledo N° 6031, Peñalolén, quien debidamente individualizada, bajo promesa y legamente exhortada a decir verdad, declara al tenor de sus dichos que constan íntegramente en el registro de audio del juicio realizado, que por economía procesal se dan por expresamente reproducidos.

III.- Exhibición de documentos:

La parte demandada y demandante reconvenional solicitó que la demandante y demandada reconvenional exhibiese en juicio la cartola de movimientos bancarios (con cargos, abonos, destino y origen de los mismos) correspondiente a su cuenta corriente del Banco BCI N° 70633908, desde octubre de 2019 hasta junio de 2020.

La parte demandante y demandada reconvenional no los exhibe al tenor de los argumentos que indicó, y ante la petición de la empresa de hacer efectivo en contra de aquella el apercibimiento legal del art. 453 N° 5 del C. del Trabajo, el tribunal en el mismo juicio accedió a lo pedido, haciendo efectivo el apercibimiento legal.

Lo anterior, sin perjuicio del alcance probatorio que se le dará, al tenor del análisis de los demás medios de prueba, conforme a lo que ordena el art. 456 del C. del Trabajo.

IV.- Diligencias:



La parte demandada y demandante reconvenional se hizo valer además del siguiente antecedente:

1.- Correo electrónico de fecha 9 de abril de 2021 remitido por el Banco BCI al tenor de la información y antecedentes que adjunta, los que por economía procesal se dan por reproducidos íntegramente por economía procesal, por ser parte integrante de la respuesta de dicha entidad.

NOVENO: Exposición somera de la prueba rendida por la demandante y demandada reconvenional. Que la parte demandante y demandada reconvenional se hizo valer en juicio de las siguientes probanzas:

I.- Documental:

1.- Certificado de Antecedentes Previsionales AFP CAPITAL de la actora de fecha 26 de enero de 2021.

2.- Carta de despido dirigido por la demandada a la actora de fecha 21 de enero de 2021.

3.- Contrato de Trabajo de la actora de fecha Agente de Ventas de 10 abril de 2017.

4.- Solicitud de Cambio de Fondos de la actora AFP Capital folio **111294023**, fecha de solicitud 15 de enero de 2021.

5.- Giros Cuenta Dos N° de Folio 1748588 de 16 de noviembre de 2020 de la actora en AFP Capital.

6.- Seguimiento de transacción giro APV de la actora AFP Capital 20-01-2021.

7.- Seguimiento de Transacción AFP Capital 26-01-2021.

8.- Cadena de Correos Electrónico el primero de fecha 18 de noviembre de 2020 dirigido por la actora de cuenta correos karina.sepulveda@afpcapital.cl a emilio.rojas@afpcapital.cl de la misma fecha y de cesar.soto@afpcapital.cl de 23/11/2020 dirigido entre otros a karina.sepulveda@afpcapital.cl.

9.- Liquidaciones de Remuneraciones Noviembre de 2020 de la actora.

10.- Liquidaciones de Remuneraciones Octubre de 2020 de la actora.

11.- Cartola de Traspaso de Fondos de la actora en AFP Capital de fecha 26 de enero de 2021.

12.- Copia captura noticia de fecha 13 de enero de 2021 "Meganoticias" en relación a denuncias afiliados AFP Capital.

13.- Carta dirigida por AFP capital de a Fernando Torrealba Chacana en relación a pagos y giros de "giro fácil".

II.- Testimonial:

La parte demandante y demandada reconvenional además logró la declaración en prueba testimonial de las siguientes personas:

1.- Max Amaro Gallardo Gutiérrez, RUN 16.337.200-2, ingeniero en administración de empresa, domiciliado en Villa Don Misael, Pasaje Los Cormonares N° 1637, Curicó, quien debidamente individualizado, legalmente juramentado y exhortado a decir verdad, declara al tenor de sus dichos que constan íntegramente en el registro de audio del juicio realizado, que por economía procesal se dan por expresamente reproducidos.

2.- Pablo Enrique Bello Silva, RUN 16.266.268-6, contador auditor, domiciliado en Pasaje El Quebracho N° 2970, Viñedos del Bordo, Curicó, quien debidamente



individualizado, legalmente juramentado y exhortado a decir verdad, declara al tenor de sus dichos que constan íntegramente en el registro de audio del juicio realizado, que por economía procesal se dan por expresamente reproducidos.

3.- Pedro Antonio Morales Gajardo, RUN 9.238.122-6, trabajador independiente, domiciliado en calle Roque Esteban Escarpa N° 2290, Víctor Domínguez Silva, Curicó, quien debidamente individualizado, legalmente juramentado y exhortado a decir verdad, declara al tenor de sus dichos que constan íntegramente en el registro de audio del juicio realizado, que por economía procesal se dan por expresamente reproducidos.

III.- Exhibición de documentos:

La parte demandante y demandada reconvenional solicitó que la empresa demandada y demandante reconvenional exhibiese en juicio los siguientes documentos:

1.- Políticas de AFP Capital SA de Privacidad y Seguridad del sitio web de AFP Capital publicadas en su página web <https://www.afpcapital.cl/Paginas/Privacidady-Seguridad>.

2.- Liquidaciones de octubre a diciembre de 2020 de la demandante y demandada reconvenional.

Tales documentos fueron exhibidos e incorporados en juicio por la empresa, a satisfacción de la parte que pidió la diligencia, sin perjuicio de las observaciones a la prueba.

3.- Nómina o listado de trabajadores de AFP Capital que están afiliados a la misma AFP.

La empresa no lo exhibe por los argumentos que describe. La parte demandante y demandada reconvenional solicita que se haga efectivo el apercibimiento legal del art. 453 N° 5 del C. del Trabajo en su contra, razón por la cual previo debate, el tribunal en juicio determino que al no exhibir ese set de documentos ni justificarse satisfactoriamente el no cumplir con lo ordenado, hizo efectivo el apercibimiento 453 N°5 del Código del Trabajo en contra de la empresa demandada en favor de la trabajadora demandante, sin perjuicio de la valoración probatoria que se pueda realizar en su momento conforme al artículo 456 del Código del Trabajo.

DÉCIMO: Hechos y circunstancias que se estiman acreditados, y razonamiento que conduce a ello. Que se exige al sentenciador, la enunciación y el análisis de la prueba, los hechos que estima probados y el razonamiento que conduce a ello, por tal razón se hace necesario expresar los fundamentos fácticos y jurídicos por los cuales se resuelve la controversia.

Así entonces y una vez analizada la extensa y amplia prueba rendida en las audiencias de juicios conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, sin contradecir y expresando las reglas de lógica, de experiencia, científicas y técnicas por las que se le asigna valor o se la desestima, tomando en consideración en este caso la gravedad, concordancia y conexión de las pruebas que se utilizan, acorde al artículo 456 del Código del Trabajo, se acreditó lo siguiente:

1.- Que entre las partes existió una relación laboral que se extendió desde el 10 de abril de 2017 hasta el 21 de enero de 2021, siendo la función de la trabajadora Karina Sepúlveda Gazzo a la fecha de conclusión de sus servicios la de “agente de ventas”, encontrándose bajo una jornada laboral sujeta al art. 22 inciso segundo del C. del Trabajo.



2.- Que la base de cálculo de la remuneración mensual de la demandante era equivalente a \$2.494.907.

3.- Que la relación laboral concluye por despido, invocando la empresa la causal del art. 160 N° 7 del C. del Trabajo en contra de la trabajadora Sra. Saavedra.

4.- Que AFP Capital SA ofrecía a sus clientes un producto denominado “giro fácil” mediante el cual, quienes tuvieran contratados productos complementarios de cuenta de ahorro voluntario, incluyendo cuentas de cotizaciones voluntarias, podían pedir giros de hasta \$300.000 por cada solicitud, con cargo a los montos de dinero que el cliente tuviera en tales cuentas, siendo pagado éste beneficio dentro de las 24 horas siguientes a su petición, siendo el dinero era entregado directamente con patrimonio de la empresa quien en los días siguientes los recuperaba de las cuentas de los clientes peticionarios.

5.- Que Karina Sepúlveda además del vínculo laboral con la empresa es cliente de la misma, al estar afiliada a la AFP Capital SA desde el 1 de febrero de 2017, presentando dentro de los productos que se le brindan una cuenta obligatoria, una cuenta de cotización voluntaria, una cuenta de depósito convenido y una cuenta de ahorro voluntario.

6.- Que la actora haciendo uso del producto “giro fácil”, al presente este servicio defectos derivados de inconsistencias del sistema- y por ende tornándolo en un producto defectuoso ofrecido a los clientes- incurrió en nueve peticiones de giros de dineros a su favor, con cargo a sus propios dineros consignados en sus cuentas de cotización voluntaria y de ahorro voluntario, generándose un sobregiro que perjudicó a la empresa en la suma de \$2.495.000.

7.- Que la forma en que fue utilizado éste “giro fácil” por Karina Sepúlveda se enmarcó en el contexto de su rol de cliente de la AFP, y no de trabajadora de la empresa.

8.- Que la empresa no fue capaz de acreditar la existencia de las acreencias en contra de la trabajadora, a propósito de \$1.500.000 por un beneficio sindical ni \$204.534 por remanente insoluto de un préstamo personal libre de intereses.

Lo anterior se da por establecido, conforme al extenso análisis que se realiza del mérito de los argumentos dados por las partes y las pruebas rendidas e incorporadas en juicio, acorde a los razonamientos que se expondrán en los considerandos siguientes de ésta sentencia definitiva.

UNDÉCIMO: Que entre las partes existió una relación laboral que se extendió desde el 10 de abril de 2017 hasta el 21 de enero de 2021, siendo la función de la trabajadora Karina Sepúlveda Gazzo a la fecha de conclusión de sus servicios la de “agente de ventas”, encontrándose bajo una jornada laboral sujeta al art. 22 inciso segundo del C. del Trabajo.

Del mérito de la etapa de discusión y las tres primeras convenciones probatorias establecidas por las partes y aprobadas por el tribunal, fueron hechos no controvertidos en la causa ni la existencia de la relación laboral entre las partes, las fechas de inicio y término de la misma, así como las funciones de la demandante a la fecha de conclusión de sus servicios y su jornada laboral excluida de la limitación ordinaria de 45 horas semanales.

Por lo demás de la sola revisión del contrato de trabajo celebrado entre las partes con fecha 10 de abril de 2017 así como aquellos anexos de contratos que fueran incorporados en juicio, fue posible corroborar las diversas cláusulas contractuales en que



expresamente se advierten las características de este vínculo laboral. Unido a ello, al tenor de la carta de despido incorporada en juicio, consta que efectivamente dicha relación de trabajo concluye el 21 de enero de 2021.

Por lo demás, todos los testigos que deponen en estrados, en mayor o menor medida, aportan elementos para corroborar todo lo anterior.

DUODÉCIMO: Que la base de cálculo de la remuneración mensual de la demandante era equivalente a \$2.494.907.

Al efecto, mientras que la trabajadora sostenía que su remuneración mensual era de tipo variable, y el promedio de los 3 últimos meses íntegramente trabajados, a saber, octubre, noviembre y diciembre todos del 2020 eran equivalentes a \$2.494.907, la empresa advertía que la remuneración de aquella era del tipo variable, y el promedio de los 3 últimos meses era de \$2.117.510, lo que se desprende de descontar montos excepcionales y no permanentes.

Al revisar el contrato de la trabajadora de 10 de abril de 2017, su cláusula octava precisa que existen remuneraciones fijas y otras variables, según el detalle que las contiene. Luego, aquel anexo de contrato de igual fecha, describe la configuración de una remuneración variable a favor de la trabajadora, al tenor de los estipendios que se describen. Con todo, se aprecia que, como las propias partes refieren efectivamente la trabajadora Sra. Sepúlveda, presenta una remuneración variable para todos los efectos –pues ambas partes lo determinan al tenor de promediar los 3 últimos meses trabajados- al tenor del art. 172 inciso 2° del C. del Trabajo.

Resulta determinante insistir que la determinación de la base de cálculo de la remuneración mensual de la trabajadora es por el inciso 2° y no el inciso 1° del art. 172 mencionado, pues, el legislador sólo en el inciso 1°, a propósito de la remuneración fija, advierte expresamente que en ella se deben excluir la asignación familiar, pagos por sobretiempo y beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez, aprehensión que no es mencionada en el inciso 2° del art. 172, en donde se expresa que la base de cálculo es determinada por el promedio percibido –sin hacer distinción sobre la naturaleza de los estipendios, emolumentos o contraprestaciones- por el trabajador en los últimos tres meses calendario, que dicho sea de paso, deben entenderse íntegramente trabajados. Por ello, el argumento dado por la empresa, para obtener un promedio de los 3 últimos meses trabajados por la Sra. Sepúlveda, excluyendo asignaciones o pagos esporádicos es incorrecto, por hacer una distinción o diferenciación que la ley no admite para la remuneración variable. Por el contrario, asumir que es aplicable el alcance del inciso 1° al inciso 2°, importa desconocer los fines del promedio que sirve de precedente en la remuneración variable, pues precisamente en ese tipo de remuneraciones, existen montos muy cambiantes, que no tienen ni la estabilidad ni la certeza de una remuneración fija. De ahí, que el legislador al no incluir en el inciso 2° la expresión referente a excluir, para la base de cálculo los pagos por estipendios ocasionales, admite que éstos si puedan ser excluidos a favor de la trabajadora, considerando que la remuneración variable por esencia, ésta expuesta a una mayor incertidumbre que afecta a la parte más débil de la relación laboral.

Aclarado ello, al revisar las liquidaciones de remuneraciones de la trabajadora de los 3 últimos meses íntegramente trabajados, y al tenor de la demanda y su contestación, existe



consenso – pese a no ser una convención probatoria, pero si ser un hecho pacífico en la causa- que corresponde a los meses de octubre hasta diciembre de 2020 ambos inclusive. Con ello, de revisar esas liquidaciones, al tenor de los documentos incorporados por ambas partes, así como aquellas que la empresa debió exhibir en juicio a petición de la trabajadora, se aprecia que ésta en octubre de 2020 percibió la suma total de \$2.966.416, en noviembre de 2020 percibió la suma total de \$2.570.025, y en diciembre de 2020 obtuvo una suma total de \$1.948.280. Con todo, el promedio de tales meses, refleja una suma equivalente a \$2.494.907, monto que para los fines del art. 172 inciso 2° del C. del Trabajo, son los establecidos en ésta causa.

DÉCIMO TERCERO: Que la relación laboral concluye por despido, invocando la empresa la causal del art. 160 N° 7 del C. del Trabajo en contra de la trabajadora Sra. Saavedra.

Habiéndose establecido que la relación laboral entre las partes concluyó el 21 de enero de 2021 –tal como se desprende de la primera convención probatoria- de igual modo se advierte que el motivo de conclusión es por el despido adoptado por la empresa en contra de la trabajadora Karina Sepúlveda, invocando en su contra la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, al tenor de la causal del art. 160 N° 7 del C. del Trabajo, cuestión que así como consta de la cuarta convención probatoria establecida por las partes, de igual modo se desprende de revisar la carta de despido de igual fecha, de cuya lectura se aprecia aquello.

Luego, acorde a lo que regulan los arts. 162 inciso 1° y 454 N° 1 inciso 2° del C. del Trabajo, es deber del tribunal analizar el contenido de los hechos descritos por la empresa en la mencionada carta de despido a fin de determinar si sus supuestos fácticos configuran la causal pretendida, no pudiendo –por expreso mandato- analizar a favor del empleador hechos ajenos a los ahí mencionados, para justificar su decisión.

DÉCIMO CUARTO: Que AFP Capital SA ofrecía a sus clientes un producto denominado “giro fácil” mediante el cual, quienes tuvieran contratados productos complementarios de cuenta de ahorro voluntario, incluyendo cuentas de cotizaciones voluntarias, podían pedir giros de hasta \$300.000 por cada solicitud, con cargo a los montos de dinero que el cliente tuviera en tales cuentas, siendo pagado éste beneficio dentro de las 24 horas siguientes a su petición, siendo el dinero era entregado directamente con patrimonio de la empresa quien en los días siguientes los recuperaba de las cuentas de los clientes peticionarios.

Este producto “giro fácil” fue descrito en esos términos por todos los testigos de la empresa, quienes en sus roles de cargos de jefaturas o encargados de algún área dentro de la entidad, describen detalladamente porque se instaura éste servicio, destacando que era un producto diverso de aquellos que ofrecían otras empresas del rubro que tardaban en promedio 4 días hábiles en otorgarles las sumas pedidas a sus clientes. En efecto, tanto César Soto en su calidad de fiscal de la entidad previsional, así como Valeria Cofré en su rol de jefa de cumplimiento en esa empresa, Diego Hernández en su calidad de subgerente de auditoria externa de la empresa, y Claudia Hernández en su función de gerente de operaciones de la empresa, todos describen y aclaran la naturaleza de ese producto, y como



era otorgado a favor de sus clientes que cumplieran con las características y condiciones para ello.

Por lo demás, la misma demandante y demandada principal, Karina Sepúlveda al prestar confesional pedida por la AFP Capital SA admite la existencia de ese producto, en los términos referidos.

DÉCIMO QUINTO: Que Karina Sepúlveda además del vínculo laboral con la empresa es cliente de la misma, al estar afiliada a la AFP Capital SA desde el 1 de febrero de 2017, presentando dentro de los productos que se le brindan una cuenta obligatoria, una cuenta de cotización voluntaria, una cuenta de depósito convenido y una cuenta de ahorro voluntario.

Sin perjuicio que su calidad de cliente es expresamente reconocida por la carta de despido, lo anterior se desprende de igual modo de revisar aquel certificado de antecedentes previsionales de AFP Capital SA respecto de la Sra. Sepúlveda, del cual se aprecia tanto su afiliación, como la fecha de incorporación como cliente, así como todos los productos de dicha entidad le otorga en calidad de particular.

Por lo demás, Karina Sepúlveda al prestar confesional pedida por la AFP Capital SA admite que así como trabajadora de dicha empresa de igual modo tenía la calidad de cliente de ésta, no siendo una situación aislada de ella, pues otros trabajadores de esa empresa se encontraban en la misma situación, cuestión que admite César Soto, así como Valeria Cofré, Diego Hernández y Claudia Hernández quienes en mayor o menor medida, a causa de las funciones que desarrollan en la empresa, admiten que así como la demandante existen varias personas que siendo dependientes de la empresa, de igual modo están afiliados a la empresa en calidad de clientes.

Sólo a mayor abundamiento, aun cuando se podría prescindir de ello, sin alterar todo lo razonado, el tribunal hizo aplicable el apercibimiento legal del art. 453 N° 5 del C. del Trabajo que pretendía la trabajadora en contra de la empresa al no haberse exhibido en juicio las nóminas de esos trabajadores, y se llega a la misma conclusión, considerando que los mismos testigos de la empresa sostienen de forma contestes, que en un proceso de investigación por peticiones que conllevaron sobregiros, a lo menos, unos 40 trabajadores de la empresa, que eran además clientes, estaban involucrados en esos hechos, incluyendo a la demandante.

DÉCIMO SEXTO: Que la actora haciendo uso del producto “giro fácil”, al presente este servicio defectos derivados de inconsistencias del sistema- y por ende tornándolo en un producto defectuoso ofrecido a los clientes- incurrió en nueve peticiones de giros de dineros a su favor, con cargo a sus propios dineros consignados en sus cuentas de cotización voluntaria y de ahorro voluntario, generándose un sobregiro que perjudicó a la empresa en la suma de \$2.495.000.

Al tenor de la carta de despido, se menciona que la Sra. Sepúlveda realizó 17 transacciones, desde su cuenta de capitalización voluntaria y de su cuenta de ahorro voluntario, precisando la individualización y la fecha en que realizaba las solicitudes entre el 7 de octubre de 2019 y el 30 de junio del 2020, así como los montos que la empresa le otorgó, así como el perjuicio que sufrió la AFP producto del sobregiro de la Sra. Sepúlveda que debió ser soportado por la entidad previsional.



No obstante ello, al revisar en forma detalla y relacionadas entre sí, tanto la planilla de Movimientos Cuenta Cotización Voluntaria (CCV) correspondiente a Karina Sepúlveda que se confecciona desde el 18 de mayo de 2017 hasta el 26 de febrero de 2021; así como la planilla de Movimientos Cuenta Ahorro Voluntario (CAV) correspondiente a Karina Sepúlveda que se extiende desde el 10 de noviembre de 2017 hasta el 26 de febrero de 2021; así como aquel “Informe de Movimientos Cuenta Cotización Voluntaria” correspondiente a Karina Sepúlveda desde enero 2017 a marzo 2021; el “Informe de Movimientos Cuenta Ahorro Voluntario” de esa persona desde enero 2003 a marzo 2021; lo primero a indicar es que esos documentos se extienden a periodos previos y posteriores a los hechos en que se funda la desvinculación, pues la imputación del supuesto incumplimiento de la trabajadora se sitúa desde el 7 de octubre de 2019 hasta el 30 de junio de 2020, lo que ya permite analizar el contenido de tales documentos, sólo dentro de esos periodos.

Aclarado ello, si bien es posible detectar algunas de las transacciones mencionadas en la carta de despidos, éstas logran ser corroboradas y por plenamente probadas, sólo por medio de aquel pantallazo de pago exitoso obtenido de la plataforma Office Banking del Banco Santander, correspondiente a la cuenta de Karina Sepúlveda, en atención a que sólo acá se advierten todos los datos necesarios para lograr a coherencia y congruencia que reclaman los arts. 162 inciso 1° y 454 N° 1 inciso 2° ambos del C. del Trabajo.

Con ello, es posible dar por establecido que efectivamente la Sra. Sepúlveda realizó 9 solicitudes de retiro a su favor, supuestamente con cargo a su propio capital que no existía, de acuerdo al siguiente detalle: desde la cuenta de cotización voluntaria bajo el N° 562158 con fecha 13 de diciembre de 2019 por la suma de \$200.000, generándose una pérdida para la empresa por igual monto; desde la cuenta de cotización voluntaria bajo el N° 569146 con fecha 18 de diciembre de 2019 por la suma de \$203.000, generándose una pérdida para la empresa por igual monto; desde la cuenta de cotización voluntaria bajo el N° 579408 con fecha 2 de enero de 2020 por la suma de \$299.000, generándose una pérdida para la empresa por igual monto; desde la cuenta de cotización voluntaria bajo el N° 615716 con fecha 12 de febrero de 2020 por la suma de \$300.000, generándose una pérdida para la empresa por igual monto; desde la cuenta de cotización voluntaria bajo el N° 663963 con fecha 30 de marzo de 2020 por la suma de \$293.000, generándose una pérdida para la empresa por igual monto; desde la cuenta de cotización voluntaria bajo el N° 683691 con fecha 23 de abril de 2020 por la suma de \$300.000, generándose una pérdida para la empresa por igual monto; desde la cuenta de cotización voluntaria bajo el N° 683725 con fecha 23 de abril de 2020 por la suma de \$300.000, generándose una pérdida para la empresa por igual monto; desde la cuenta de cotización voluntaria bajo el N° 705498 con fecha 26 de mayo de 2020 por la suma de \$300.000, generándose una pérdida para la empresa por igual monto; y desde la cuenta de ahorro voluntario bajo el N° 1521174 con fecha 4 de junio de 2020 por la suma de \$300.000, generándose una pérdida para la empresa por igual monto. La sumatoria de todas esas operaciones refleja un detrimento por concepto de sobregiros que la empresa debió soportar por un monto de \$2.495.000.

Así la empresa, pese a la individualización en la carta de despido de otras transacciones, sólo logró aportar elementos objetivos que permitiesen corroborar con total



precisión tales operaciones, tanto en fechas, cuantías, y especialmente cuentas de origen y número de operación.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que las restantes transacciones a que se hacen referencia en la carta de despido no pudieron ser identificadas por el tribunal, conforme al mérito de la documentación incorporada por la empresa con aquel nivel de precisión que se le exige al tenor de la propia información que ella explica en su carta de despido.

Es más, al revisar de igual modo aquellos formularios denominados “Solicitud de Retiro Cuenta Ahorro Previsional Voluntario (remanente), de las siguientes fechas de suscripción: 28/09/2018; 16/10/2018; 22/10/2018; 20/11/2018; 21/11/2018; 03/12/2018; 17/12/2018; 30/01/2019; 13/02/2019; 15/03/2019; 18/04/2019; 02/05/2019; 06/05/2019; 15/05/2019; 04/06/2019; 12/06/2019; 13/06/2019; 17/06/2019; 17/07/2019; 18/07/2019; 12/08/2019; 05/09/2019; 12/09/2019; 16/09/2019; 02/10/2019 (solicitud y comprobante de pago de retiros); 02/10/2019; 11/10/2019; 18/11/2019; 23/12/2019; 27/12/2019; 13/01/2020; 27/01/2020; 10/02/2020; 11/02/2020; 13/02/2020; 13/03/2020; 16/03/2020; 25/03/2020; 08/04/2020; 09/04/2020; 21/04/2020; 22/04/2020; 11/05/2020; 12/05/2020; 22/05/2020, y los formularios denominados “Solicitud de Retiro Cuenta Ahorro Voluntario (anticipo), de las siguientes fechas de suscripción: 17/01/2018; 13/02/2018; 13/03/2018; 18/04/2018; 07/06/2018; 14/06/2018; 20/07/2018; 02/10/2018; 11/10/2018; 16/10/2018; 22/10/2018; 21/11/2018; 22/11/2018; 30/11/2018; 17/12/2018; 16/01/2019; 21/01/2019; 04/03/2019; 15/03/2019; 04/06/2019; 13/04/2020; 16/04/2020; 28/04/2020; 13/05/2020; 22/05/2020; 02/06/2020, de igual modo se advierte como primera cuestión que figuran transacciones en periodos muy anteriores y posteriores a aquella extensión temporal dentro de la cual, la AFP advertía las supuestas conductas de incumplimiento de la trabajadora.

Luego, limitándose el tribunal a analizar en esos documentos los periodos a que se hacen referencia en la carta de despido, precisamente de las transacciones no detectadas, fue posible advertir operaciones por cuantías coincidentes dentro del mismo mes en que se atribuían. No obstante ello, la ausencia de algún elemento que esclareciera la fecha de ocurrencia de las mismas, la cuenta de origen y en especial, el número de transacción mencionado en la carta de despido, impide al tribunal a efectuar hipótesis o interpretaciones a favor del empleador, pues de ser así, se estaría obrando en contra del principio protector laboral, y en especial en la regla del *in dubio pro operario*, de modo que ante la ambigüedad y falta de precisión de la empresa sobre las restantes transacciones, el tribunal no puede aplicar una interpretación favorable para el empleador, máxime si sobre éste recaía la carga procesal probatoria.

Pese a que el tribunal hizo efectivo en contra de la trabajadora aquel apercibimiento legal del art. 453 N° 5 del C. del Trabajo al no exhibir los movimientos bancarios entre octubre de 2019 y junio de 2020, tal apercibimiento permite corroborar lo ya acreditado en el proceso, no siendo suficiente éste apercibimiento legal para suplir aquellas ausencias probatorias sobre otros sobregiros descritos en la comunicación de despido, por cuanto, al ser el art. 453 N° 5 un apercibimiento legal, es decir, que admite prueba en contra, exige que sea coherente con las restantes pruebas de juicio, tal como mandata el art. 456 del C. del Trabajo.



Por lo demás, pese a que la parte demandada y demandante reconventional incorporó en juicio aquel cuadro con el detalle de las operaciones a que hace referencia en su carta de despido, de su lectura se aprecia que sólo es un archivo elaborado por la misma parte que lo ofrece, sin que puede corroborarse con el mérito de los demás antecedentes mencionados razón por la cual, carece de toda relevancia probatoria.

DÉCIMO OCTAVO: Que la forma en que fue utilizado éste “giro fácil” por Karina Sepúlveda se enmarcó en el contexto de su rol de cliente de la AFP, y no de trabajadora de la empresa.

En efecto, pese a que la carta de despido efectúa una exposición extensa imputándole a la trabajadora que ella infringió diversas disposiciones contractuales, así como del reglamento interno e inclusive normas legales básicas en materia de contratos civiles, es determinante precisar que el uso – cuestionable por lo demás- que le dio la Sra. Sepúlveda al “giro fácil” generando éste sobregiro, jamás se desarrolló a consecuencia de las funciones o labores como trabajadora dependiente de la empresa, sino en su calidad de cliente de la empresa, quien hacía uso de productos que la empresa ponía a su disposición.

En efecto, al revisar la declaración en confesional de Karina Sepúlveda pedida por la empresa, se advierte que ella reconoce en todo momento que las veces que realizó transacciones a fin de utilizar el producto “giro fácil”, siempre utilizó sus claves propias que la empresa le asignó como cliente, y jamás como trabajadora. Ello, es coincidente con lo depuesto por los mismos testigos de la empresa, a saber, César Soto, Claudia Hernández, Valería Cofré y Diego Hernández, quienes tras describir que toman conocimiento de forma muy posterior a la ocurrencia de los giros, que la demandante incurrió en sobregiros ya que el sistema virtual no registraba oportunamente las solicitudes de ella, con lo que pudo percibir varias veces montos superiores a aquellos que tenía en sus cuentas voluntarias, admiten todos los testigos que esto se realizaba en su calidad de cliente de la empresa. Pese a que los testigos de la empresa pretenden atribuir a que la demandante y demandada principal, en las funciones que realizaba en la empresa, gozaba de un mayor margen de información y movilidad en las plataformas, lo cierto es que quedó claro en juicio que las peticiones de ella, fueron desde sus claves propias como cliente, sin que el servicio “giro fácil” le negase los dineros pedidos.

Es más, los mismos testigos de la empresa, como aquellos testigos ofrecidos por la Sra. Sepúlveda, a saber, Max Gallardo, Pedro Morales y Pablo Bello, éstos últimos quienes dan razón de sus dichos como ex compañeros de trabajo de la demandante y demandada principal, advierten que todos esos giros solicitados eran pedidos siempre en calidad de cliente de la AFP, con cargo a las propias cuentas voluntarias, sin que para realizar aquello fuera determinante tener o no la calidad de trabajador dependiente de la empresa, y sin que se requiriera de información privilegiada o reservada de la empresa. Bastaba con pedir los giros mediante el producto “giro fácil” y con ello, gestionar sus pagos, con cargo a los propios fondos. Todos los testigos de las partes, admiten consensuadamente que los errores del producto, al no registrar oportunamente los giros a favor de los clientes y de la demandante, no eran consecuencia de manipular, alterar o generar deficiencias del programa, pues éste de forma propia e independiente generaba el error informático.



Los mismos testigos tanto de la demandada como de la demandante admiten que independiente que los giros fueran o no registrados por el sistema virtual, ésta situación afecto a más de 1000 a 1200 personas en su calidad de clientes de la AFP, siendo sólo 40 personas aproximadamente las que adicionalmente eran trabajadoras de igual modo de la empresa.

Que lo anterior se corrobora de revisar aquella copia del informe de investigación interna realizada por la empresa bajo la denominación “incidente giro fácil”, y de la cual, todos los testigos de la empresa dan cuenta, en donde es posible advertir que efectivamente la empresa admite la existencia de un error operacional por el cual, se pudo detectar que el sistema fue vulnerable y defectuoso aproximadamente entre el 26-11-2018 y el 26-06-2020, considerando la primera y última operación irregular detectada en esa investigación, ante lo cual, efectivamente se vieron involucrados más de 1000 clientes, incluyendo de esos clientes, a 43 trabajadores.

De la lectura del informe, y como fue corroborado por los testigos de la empresa, se advirtió que algunos de esos trabajadores se vieron involucrados en cuantías menores, o en un número de operaciones esporádicas u ocasionales, siendo en el caso de la demandante y demandada principal, uno de los casos, en que las operaciones fueron más reiteradas en el tiempo, y cuyas cuantías, una vez sumadas, eran elevadas. Aun así, del mismo informe se admite que esas ganancias irregulares de Karina Sepúlveda, se verifican siempre en su rol de cliente de la empresa, indistintamente que fuera además trabajadora dependiente. El propio informe al establecer el proceder en contra de las personas involucradas, que eran dependientes de la empresa, expresamente refiere que son medidas a adoptar para tales personas por lo realizado como “clientes”.

DÉCIMO NOVENO: Que la empresa no fue capaz de acreditar la existencia de las acreencias en contra de la trabajadora, a propósito de \$1.500.000 por un beneficio sindical ni \$204.534 por remanente insoluto de un préstamo personal libre de intereses.

Consideremos que la empresa al demandar reconvencionalmente a la trabajadora, sostenía que se le adeudaban \$1.500.000 por un abono otorgado en enero de 2021, producto de un beneficio sindical, y de igual modo, le adeudaban \$204.534, correspondiente al remanente insoluto de un préstamo personal libre de intereses otorgado por la empresa a la señora Sepúlveda el mes de marzo de 2020. Ante ello, en la contestación de la acción reconvencional, la trabajadora negó expresamente tales deudas, siendo carga procesal probatoria de la empresa, que se reputaba acreedora, de acreditar la existencia de las deudas.

Al analizar aquellos correos electrónicos incorporados por la empresa que fluctúan entre el 29 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021, consta que ésta le informa a la trabajadora Sra. Sepúlveda que se concederá un préstamo de \$1.500.000 por beneficio del Sindicato Nacional, informándosele que su pago se verificaría por medio de un abono a realizar el 15 de enero de 2021. Pese a que en juicio la parte demandada y demandante reconvencional logró que el tribunal hiciera efectivo el apercibimiento del art. 453 N° 5 del C. del Trabajo en contra de la trabajadora, al no exhibir ésta la cartola de movimientos bancarios, al ser una petición que se extendía entre octubre de 2019 y junio de 2020, el



alcance de éste apercibimiento legal no afecta temporalmente al mes de enero de 2021, por lo que no se puede comprobar que dicho abono se pagó.

De igual modo, del mérito del email de 9 de abril de 2021 remitida por el Banco BCI tampoco es posible advertir que se realizó el pago mencionado de \$1.500.000 a favor de la trabajadora en enero de 2021. Por ello no hay prueba, salvo aquellos correos que daban cuenta de la intención de la empresa empleadora de conceder un abono por beneficio sindical a favor de la trabajadora, que permita configurar la existencia de una deuda en esa suma a su favor.

A su vez, a propósito de los argumentos sobre la deuda por \$204.534, tampoco hay prueba que permita configurar sus supuestos de su existencia, ya que no hay elemento que lo configure. Es más, en la prueba confesional de la trabajadora tampoco se hace mención a estas supuestas deudas.

VIGESIMO: Del despido indebido. Que al tenor de los hechos que se dieron por establecidos en la causa, es necesario advertir que al tenor de la carta de despido dentro de las infracciones que el despido le atribuye a la actora se contienen el citado art. 160 N° 7 del C. del Trabajo que refiere en lo pertinente que *“Art. 160.- El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales: N° 7.- Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”*. Para relacionarlo con la cláusula del contrato de trabajo que dispone una serie de deberes e imperativos, así como prohibiciones que le afectaban a la Sra. Sepúlveda.

La empresa advertía que además se habían vulnerado normativas del reglamento interno y del código de ética de la empresa, y pese a que la trabajadora indicaba que no era viable de aplicar tales exigencias, el tribunal debe diferir de ello por cuanto el mismo art. 154 del C. del Trabajo en su numeral 5 advierte que existen obligaciones y prohibiciones que se le exigen a los trabajadores, y que al igual que el código de ética, eran de conocimiento de las partes – cuestión que la trabajadora no negó expresamente – siendo parte integrante de las exigencias que se le atribuyen en el ejercicio de sus labores como dependiente de la AFP.

Con ello, la carta de despido refería que la trabajadora además había infringido del reglamento interno de orden, higiene y seguridad su art. 8, de cuya lectura acorde al reglamento interno incorporado en juicio se desprende un extenso catálogo de prohibiciones, y al revisar aquel código de ética de la empresa en su numeral 8.3, que fue incorporado en juicio y que también es mencionado en la comunicación de término, se describen las sanciones que la empresa aplicara a los trabajadores que adopten medidas ajenas a las de lealtad y buena fe.

Con todo, todas esas normativas mencionadas, asumen un elemento común, básico, condicionante y determinante: que sus infracciones sea cometidas por la trabajadora en su rol de tal.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que acorde a los hechos establecidos en la causa, la conducta cuestionable de Karina Sepúlveda, al realizar sendas solicitudes de giros a su favor, con cargo –supuestamente- a fondos propios contenidos en cuentas de cotización voluntaria y de ahorro voluntario- generándose sobregiros que deben ser asumidos



finalmente por la AFP, en ningún momento se desarrollan en calidad de trabajadora dependiente de la empresa, sino en su calidad de clienta de la misma.

Bajo esa lógica, no habiéndose acreditado que la conducta de la Sra. Sepúlveda importase la utilización de información privilegiada, o de información reservada, o la utilización o aprovechamiento del cargo y función que desarrollaba, permite concluir que la actuación de ésta persona, cuestionable dicho sea de paso, no se enmarca en el contexto ni de la relación laboral, así como en ninguna de las disposiciones ni del C. del Trabajo, ni del contrato de trabajo, ni del reglamento interno ni el código de ética de la empresa.

Es más, tal como lo advierte la carta de despido, si bien se verificase un incumplimiento éste se verifica entre dos particulares en un mismo plano de igualdad contractual, pero no en una relación asimétrica, siendo así posible debatir la aplicación del art. 1546 del C. Civil, pero en su rol de cliente y no dependiente.

Aun así, es cuestionable que si la empresa ofrece un producto defectuoso, generándose un uso desmedido del mismo por una cliente, se pretenda por la AFP asumir que su obrar debe ser sancionado, no en su calidad de afiliado sino de dependiente, lo que es improcedente.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que recordando que el derecho del trabajo propende a la protección del trabajador, quien se encuentra frente a una situación de asimetría contractual.

Con ello, la AFP Capital SA puso término al vínculo de trabajo invocando un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo respecto de la Sra. Sepúlveda. Esto es reflejo de una expresión del poder disciplinario del empleador, en concreto como una sanción en el contexto de sanción privada.

Con ello, la causal de despido, como es propio, no solo debe ser acreditada en su supuesto fáctico al tenor de los hechos mencionados en la carta de despido, sino que además debe ser interpretada restrictivamente, ya que entendiéndolas como una sanción por el desempeño laboral del trabajador, es justamente en ese ámbito en el cual deben producirse los hechos que la configuran, considerando que la estabilidad laboral es lo que la sociedad pretende como lo óptimo, siendo el despido la situación excepcional.

VIGÉSIMO TERCERO: Que en la especie, era determinante advertir si las imputaciones que la empresa realizaba a la actora y demandada reconventional eran imputables en el contexto de su rol de trabajadora o de cliente. Cuestión que como ya se ha sostenido latamente de forma previa, fue siempre como cliente, lo que impide configurar la causal invocada, al no existir a su respecto un incumplimiento del contrato de trabajo, más cuando no existe ninguna estipulación que se vincule a este supuesto quebrantamiento, de manera que el detalle de los hechos imputados no guarda relación con el cometido específico de la demandante y demandada reconventional como trabajadora.

Pese a que la empresa sostiene en su carta de despido, que la conducta reiterada de la trabajadora, pese a efectuar tales operaciones de sobregiro como clienta, eran reiteradas y con conocimiento de sus consecuencias, afectando el contenido “ético-jurídico” del contrato de trabajo, no podemos desentendernos que el despido es la sanción máxima que el empleador puede adoptar respecto de sus trabajadores, la introducción de ese tipo de nociones, de carácter indeterminado en materia de causalidad del despido “*generan inseguridad jurídica y desfavorece la posición de los más interesados en la plena*



justificación de las medidas extintivas como son los trabajadores” (Monereo Pérez, José L.; Fernández Avilés, José A., “La reconfiguración causal del despido colectivo: algunas reflexiones críticas”, en, Presente y futuro de la regulación del despido, Castiñeira Fernández, J. (Coord.) Aranzadi, Madrid, 1997, p. 172).

VIGÉSIMO CUARTO: Que en ese orden de ideas, la causal alegada importa que exista una limitación clara y precisa, a saber, que la sanción se extienda al incumplimiento de aquellas obligaciones de estricta fuente contractual o que tengan una conexión necesaria y directa con el contrato de trabajo, lo que no ocurre en la especie.

En este orden de ideas, se ha sostenido que el incumplimiento debe tener una conexión necesaria y directa con el contrato de trabajo. Ello impide extender la sanción a cualquiera otra fuente, privilegiando la de carácter contractual, y que corresponde a aquella que cae directamente bajo los sentidos de los contratantes, debiendo interpretarse sus cláusulas en correlación con las funciones que está obligado a desempeñar el trabajador. (tal como lo advierte la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 355-2010).

En consecuencia, aparece evidente que los resquemores que la empleadora efectuó a la trabajadora no se realizaron en el desempeño de sus funciones como trabajadora de la AFP, ni con ocasión de ese carácter, sino que se enmarcan en su calidad de cliente. De este modo, se confunde una supuesta exigencia de honradez y rectitud con un posible incumplimiento contractual.

Es más, no se logró acreditar ni con el mérito de la investigación interna de la empresa ni con los dichos de todos los testigos ofrecidos por esta en juicio, de las razones por la cuales se le exigió a la trabajadora un estándar superior a la de los restantes clientes igualmente involucrados- que eran más de 1000 personas, siendo 43 de éstos dependientes de la empresa- considerando que como lo reconocen los mismos testigos de la demandante, algunos de los propios trabajadores de la empresa, que se vieron involucrados en hechos similares, por ser cuantías u operaciones inferiores, tuvieron la opción de renunciar o reiterarse con algunos pagos de conceptos o indemnizaciones legales, lo que no aconteció con la demandante.

Además, insistir que la decisión con ella, fue por el volumen de operaciones realizadas y la cuantía involucrada –pese a que fue acreditado en juicio que éstos fueron menores a la extensión descrita en la carta de despido- siendo lo fue, en su rol de cliente y no de trabajadora.

Con todo ello, al no verificarse los supuestos del art. 160 N° 7 del C. del Trabajo, el tribunal entiende que el despido de la demandante fue indebido para todos los efectos legales.

VIGÉSIMO QUINTO: De las indemnizaciones legales y prestaciones reclamadas. Que al haberse establecido la existencia del despido indebido de la Sra. Sepúlveda, se aprecia que las indemnizaciones legales que regula el art. 168 del C. del Trabajo en relación a los arts. 162 y 163 del mismo cuerpo legal son procedentes, máxime si se cuenta con los elementos de determinación al saber tanto a la extensión de la relación laboral entre las partes y la base de cálculo de la remuneración mensual de la trabajadora.

Con ello, por aplicación del artículo 168 en relación con los arts. 162 y 163 todos del Código del Trabajo, resulta aplicable la indemnización sustitutiva de aviso previo, la que en



éste caso se determina en la suma de \$2.494.907 a favor de la trabajadora demandante, que la empresa demandada debe pagar.

En lo referente a la indemnización por años de servicios, conforme al art. 168 en relación con el art. 163 del C. del Trabajo, considerando la extensión de la relación laboral entre las partes fue desde el 10 de abril de 2017 hasta el 21 de enero de 2021, a saber, de 3 años y fracción superior a 6 meses, que conforme al art. 163 inciso 2° segunda parte del C. del Trabajo, es equivalente a 4 años, al tenor de la base de cálculo de la remuneración mensual de la demandante, esto recae en la suma por indemnización por años de servicios en \$9.979.628, que el demandado deberá pagar.

En cuanto al incremento porcentual que el art. 168 letra “C” del C. del Trabajo regula, al estar ante un despido indebido, corresponde su procedencia, la que a razón del 80% de la indemnización por años de servicios, la que siendo su base de determinación \$9.979.628, ello da un monto equivalente a \$7.983.702, debiendo la empresa demandada ser condenada a su pago a favor de la trabajadora demandante.

Se hace presente que todos esos montos deben, por el sólo ministerio de la ley, ser sometidos a la aplicación a los reajustes e intereses conforme a lo que regula el artículo 173 del Código del Trabajo.

VIGÉSIMO SEXTO: Que en cuanto al feriado proporcional, es necesario advertir que ninguna de las partes plantea un mayor análisis sobre su extensión o alcance. Luego, sin perjuicio que se analiza en detalle aquel set de comprobantes de vacaciones que la empresa incorpora respecto de la trabajadora, que datan desde los años 2017 hasta el 2020 inclusive, del momento que el actor no alega ni reclama feriados legales o anuales, acorde a lo que regula el art. 67 y siguientes del C. del Trabajo, sólo refiriéndose al “feriado proporcional” ello obliga al tribunal a analizar los arts. 73 y siguientes del C. del Trabajo.

Aclarado ello, el feriado proporcional se entiende que es aquel que se desprende agotado el feriado legal – que no fue reclamado en esos términos por la trabajadora- lo que permite asumir que ella hizo uso de sus feriados anuales, cuestión que se contrasta con los set de comprobantes de vacaciones de años anteriores, dando así cobertura al periodo que va desde el 10 de abril de 2017 hasta el 9 de abril de 2018, desde el 10 de abril de 2018 hasta el 9 de abril de 2019, y desde el 10 de abril de 2019 hasta el 9 de abril de 2020, los que acorde a los mencionados documentos incorporados por la empresa, y la ausencia de reclamo de éstos feriados anuales, hacen concluir que fueron otorgados a favor de la trabajadora.

Con ello, el feriado proporcional a analizar es el margen existente desde el vencimiento del último feriado anual hasta la fecha de conclusión de la relación laboral, a saber, desde el 10 de abril de 2020 hasta el 21 de enero de 2021, lo que se traduce en 9 meses y 11 días. Luego, revisando de ese periodo, la existencia de días otorgados o pagados por la empresa por tal concepto, acorde al set de comprobantes de vacaciones se concluye que se le brindaron entre el 10 de abril de 2020 hasta el 21 de enero de 2021, 11 días de descanso, que deben descontarse, quedando pendiente así por feriado proporcional el equivalente a 9 meses. Si bien en los comprobantes de vacaciones de ese tiempo, se hace mención a que son con cargo al feriado anual, tal como se mencionó, no habiendo la actora descrito con mayor precisión los días adeudados, pero en especial, el no haber



reclamado feriado anual, permiten entender que siempre se debió imputar al feriado proporcional.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que con todo, siendo 9 meses los que se deben considerar para los fines del cálculo del feriado proporcional reclamado, al tenor de lo que regulan los artículos 73 y siguientes del C. del Trabajo, y lo indicado por la Dirección del Trabajo conforme a los dictámenes N° 799/67 de 01.03.2000 y N° 13/06 de 05.01.2004, que se pronuncian sobre el procedimiento de cálculo de rigor del mismo, haciendo presente que al considerar 15 días de feriado legal y se divide por los 12 meses del año, ello da un equivalente a 1,25 días feriado proporcional por mes; mientras que utilizando ese monto y dividirlo por 30 días de un mes, da un valor de 0,04167 por feriado proporcional por día.

Siendo así, si a la demandante le adeudan por feriado proporcional finalmente sólo 9 meses, lo que es equivalente a multiplicar estos 9 meses por el factor de 1,25, ello da un total de 11,25 días hábiles de feriado proporcional a contabilizar (excluyendo sábados, domingos y festivos), desde el día siguiente al despido. Ello nos presenta un periodo desde el 22 de enero de 2021 hasta el 5 de febrero de 2021, que al convertirse en días corridos (ahora incluyendo sábados, domingos y festivos) da un total de 15 días corridos a pagar.

Con ello, si la remuneración mensual promedio del actor, por aplicación del art. 172 del C. del Trabajo era de \$2.494.907, al dividirlo por 30 días, da un monto de remuneración diaria a favor de la trabajadora de \$83.164, que al multiplicar por 15 días, es equivalente a \$1.247.460 que la empresa deberá pagarle a la trabajadora.

Dicho concepto por feriado proporcional, se debe someter conforme al art. 63 del C. del Trabajo, a la aplicación de los reajustes e intereses legales, para todos los efectos legales.

VIGÉSIMO OCTAVO: Del rechazo de la demanda reconvencional de compensación; de los demás medios de prueba; y de las costas de la causa. Que tal como consta del análisis de esta sentencia, referente a los hechos establecidos, en la especie la empresa en su calidad de demandante reconvencional, al no ser capaz de acreditar la existencia de las acreencias para reclamar en contra de la trabajadora, a propósito de \$1.500.000 por un beneficio sindical ni \$204.534 por remanente insoluto de un préstamo personal libre de intereses, obligan a rechazar la demanda reconvencional, al no existir deuda imputable a la trabajadora como demandada reconvencional.

Luego, al revisar la documentación del actor consistente en aquella colicitud de Cambio de Fondos de la actora AFP Capital folio 111294023, fecha de solicitud 15 de enero de 2021, así como aquel Giros Cuenta Dos N° de Folio 1748588 de 16 de noviembre de 2020 de la actora en AFP Capital; el seguimiento de transacción giro APV de la actora AFP Capital 20-01-2021; el seguimiento de Transacción AFP Capital 26-01-2021; y la cadena de Correos Electrónico el primero de fecha 18 de noviembre de 2020 dirigido por la actora de cuenta correos karina.sepulveda@afpcapital.cl a emilio.rojas@afpcapital.cl de la misma fecha y de cesar.soto@afpcapital.cl de 23/11/2020 dirigido entre otros a karina.sepulveda@afpcapital.cl, tales antecedentes salvo reforzar el que la trabajadora era además cliente de la empresa, y era titular de productos que la AFP le ofrecía, no en su rol de trabajadora, sino de afiliada; así como que aquellas comunicaciones mantenidas a propósito de la investigación interna realizada por la empresa – lo que es concordante con



los dichos de todos los testigos de la empresa- a fin de dar cuenta que se contactaron con ella, por las operaciones que derivaron en sobregiros, ello no altera en nada, a que esas actuaciones se verifican en su rol de cliente de la AFP y no de trabajadora de la misma, por lo que no alteran en nada lo razonado, debiendo estarse a lo ya analizado. Ideas que se replican, al revisar la cartola de Traspaso de Fondos de la actora en AFP Capital de fecha 26 de enero de 2021, y aquella carta dirigida por AFP capital de a Fernando Torrealba Chacana en relación a pagos y giros de “giro fácil”, debiendo igualmente estarse a lo analizado en la presente sentencia.

Luego, de revisar aquella copia de captura de noticia de fecha 13 de enero de 2021 “Meganoticias” en relación a denuncias afiliados AFP Capital, ese elemento probatorio no aporta nada relevante a la causa, máxime si los mismos testigos de la empresa admiten que el producto “giro fácil” presentó fallas viéndose más de 1000 clientes, entre ellos la misma demandante, como afectados en ello. Por ello, la publicación de esa publicación, carece de mérito, por lo que se debe estar a lo analizado extensamente en juicio. En el mismo sentido, pese a leer en extenso aquellas políticas de la AFP en materia de privacidad y seguridad, y que fuera exhibida en juicio, ésta información sólo corrobora que la demandante Sra. Sepúlveda no infringe alguna información restringida ni privilegiada, del momento que las conductas mencionadas en la carta de despido, se ajustan a un comportamiento como cliente de la AFP; y no en su rol de trabajadora, debiendo así estar a lo analizado ya en éste fallo. Con ello, habiéndose hecho cargo el tribunal de la totalidad de las alegaciones y pruebas rendidas en juicio, no hará mayor análisis debiendo estarse a lo ya razonado.

Finalmente, considerando que pese a que la empresa en su rol de demandada y demandante reconventional fue totalmente vencida, no presentó motivo plausible para litigar, motivo por el cual se le condenará al pago de las costas de la causa, las que se regulan en la suma de \$600.000.- suma de dinero que no se someterá ni a reajustes ni a intereses.

En virtud de lo anteriormente razonable y expuesto y al tenor de lo señalado en los artículos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 y siguientes, 159, 160 N° 7, 162, 168, 171, 172, 173, 177, 420, 446 y siguientes, 456, y demás pertinentes del Código del Trabajo, y demás normas ya citadas al efecto, **SE RESUELVE:**

I.- Que se **ACOGA** la demanda de despido indebido y cobro de indemnizaciones y prestaciones deducida por Karina Andrea Sepúlveda Gazzo, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital SA, representada legalmente por Jaime Munita Valdivieso, todos ya individualizados, y en consecuencia se declara:

A.- Que entre las partes existió una relación laboral regida por el Código del Trabajo, continua e ininterrumpida desde el 10 de abril de 2017 y hasta el 21 de enero de 2021, en virtud de la cual la trabajadora demandante prestó labores para la demandada AFP CAPITAL S.A. como Agente de Ventas.

B.- Que la base de cálculo de la remuneración mensual promedio de la demandante, era equivalente a \$2.494.907, para fines del art. 172 del C. del Trabajo.

C.- Que el término de la relación laboral se produjo con fecha 21 de enero de 2021, y que el empleador imputó a la demandante la causal del artículo 160 N° 7 del Código del



Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo.

D.- Que dicho despido resultó ser indebido.

E.- Que como consecuencia de lo anterior, se condenada a AFP Capital SA pagar a Karina Sepúlveda Gazzo los siguientes conceptos:

E.1.- Por indemnización sustitutiva de aviso previo la suma de \$2.494.907 (dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos siete pesos).

E.2.- Por indemnización por años de servicios en la suma de \$9.979.628 (nueve millones novecientos setenta y nueve mil seiscientos veintiocho pesos).

E.3.- Por incremento porcentual que el art. 168 letra "C" del C. del Trabajo a razón del 80% de la indemnización por años de servicios, la suma de \$7.983.702 (siete millones novecientos ochenta y tres mil setecientos dos pesos).

E.4.- Que las mencionadas indemnizaciones e incrementados contenidas en los literales E.1, E.2 y E.3, deberán ser sometidos a la aplicación a los reajustes e intereses conforme a lo que regula el artículo 173 del Código del Trabajo.

E.5.- Por concepto de feriado proporcional en la suma de \$1.247.460 (un millón doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta pesos).

E.6.- Que dicha prestación laboral mencionada en el literal E.5.-, se debe someter conforme al art. 63 del C. del Trabajo, a los intereses y reajustes legales en la forma que ahí se menciona.

II.- Que se **RECHAZA** la demanda reconvencional de compensación deducida por la Administradora de Fondos de Pensiones Capital SA, representada legalmente por Jaime Munita Valdivieso en contra de Karina Andrea Sepúlveda Gazzo, todos ya individualizados.

III.- Que siendo la AFP Capital SA totalmente vencida, tanto como demandada así como demandante reconvencional, al estimar que no tuvo motivo plausible para litigar, se le condena al pago de las costas de la causa que se establecen prudencialmente en la suma de \$600.000 (seiscientos mil pesos), suma de dinero que no se someterá ni a intereses ni a reajustes legales.

Una vez que quede ejecutoriada la presente sentencia, remítase a la Unidad de Cumplimiento en etapa de Cobranza Judicial, y hecho lo anterior, archívese por afinada.

Todas las partes quedan válidamente notificadas de lo resuelto con esta fecha al tenor del artículo 457 inciso 2º del Código del Trabajo y por lo tanto, desde esta notificación comienza a correr el plazo legal para impugnarla.

Regístrese y en su oportunidad archívense lo antecedentes.

RIT O-47-2021

RUC 21-4-0320573-4,

Sentencia dictada por **CARLOS GAJARDO ORTIZ**, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó.

//En Curicó, a diez de septiembre de dos mil veintiuno, notifique la sentencia definitiva que antecede por estado diario.

